

DOCUMENTACION

HOMILIA DE JUAN PABLO II, DEL 14-IX-1980, EN SIENA

[...] El Problema de la afirmación de la vida humana desde el primer instante de su concepción y, en caso de necesidad, también el problema de la defensa de esta vida, está unido de modo estrechísimo *con el orden más profundo de la existencia de hombre, como ser individual y como ser social*, para quien el ambiente primero y fundamental no puede ser sino el de una auténtica *familia humana*.

Por esto es necesaria la afirmación explícita de la vida humana desde el primer instante de su concepción bajo el corazón de la madre, es necesaria también la defensa de esta vida cuando está amenazada de cualquier modo (amenazada también socialmente), es necesaria e indispensable, porque, a fin de cuentas, se trata aquí de la *fidelidad a la humanidad misma*, de la *fidelidad a la dignidad del hombre*.

Se debe aceptar esta dignidad desde el principio. Si se la destruye en el seno de la mujer, en el seno de la madre, será difícil defenderla después en tantos campos y ámbitos de la vida y de la convivencia humana.

Efectivamente, ¿cómo es posible hablar de derechos humanos, cuando se viola este derecho primigenio? Muchos disertan hoy sobre la dignidad del hombre, pero no vacilan, después, en conculcar al ser humano, cuando éste se asoma, débil e indefenso, a los umbrales de la vida. ¿No hay una contradicción en todo esto? No debemos cansarnos de afirmarlo: el derecho a la vida es el derecho fundamental del ser humano un *derecho de la persona, que obliga desde el principio*.

[...] La vida es sagrada. Es sagrada la maternidad de cada madre.

De aquí el problema de la afirmación de la vida. El problema de la defensa de la vida ya en el seno de la madre es, para todos los que confiesan a Cristo, un problema de fe y un problema de conciencia.

Y es problema de conciencia también para los otros, para todos los hombres sin excepción: lo es *en virtud de su misma humanidad*. [...].

DISCURSO DE JUAN PABLO II, DEL 27-X-80, A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DE MEDICINA Y CIRUGIA

[...]

3. La verdad es que el desarrollo tecnológico, característico de nuestro tiempo, sufre una ambivalencia de fondo: mientras por una parte

permite al hombre que se haga cargo de su propio destino, por otro lado lo pone en tentación de sobrepasar los límites razonables del dominio sobre la naturaleza poniendo en peligro la misma supervivencia e integridad de la persona humana.

Consideremos, para no salirnos del ámbito de la biología y de la medicina, la implícita peligrosidad que respecto al derecho del hombre a la vida, deriva de los descubrimientos hechos en el campo de la inseminación artificial, del control de la natalidad y fertilidad de la hibernación y de la «muerte lenta», de la ingeniería genética, de los fármacos de la psique, de los transplantes de órganos, etc. Es cierto que la investigación científica tiene sus propias leyes a las que atenerse. Pero esta investigación debe reconocer, sobre todo en medicina, un límite insalvable: el respeto a la persona y su derecho a vivir de un modo digno, propio del ser humano.

Por ejemplo, si un nuevo método de investigación perjudica, o corre peligro de perjudicar, este derecho, no se puede considerar lícito sólo porque aumente nuestro conocimiento. Efectivamente, la ciencia no es el valor más alto al cual deban subordinarse todos los demás. Más alto, en la escala de valores, está precisamente el derecho personal del individuo a la vida física y espiritual, a su integridad psíquica y funcional. De hecho, la persona es medida y criterio de bondad o culpa en toda manifestación humana. El progreso científico, por lo tanto, no puede pretender situarse en una especie de terreno neutro. La norma ética fundada en el respeto de la dignidad de la persona debe iluminar y disciplinar tanto la fase de investigación como la de la aplicación de los resultados alcanzados antes.

4. Desde hace algún tiempo se oyen en este campo voces alarmanantes, que denuncian las consecuencias dañosas derivadas de una medicina que se preocupa más de sí misma que del hombre al que debería servir. Pienso, por ejemplo, en el campo farmacológico. Es indudable que la riqueza y eficacia de los fármacos de que disponemos es la base de los prodigiosos éxitos de la moderna terapia. Es un hecho, sin embargo, que entre los capítulos de la patología actual se ha añadido uno nuevo, el *iatrogénico*. Son cada vez más frecuentes las manifestaciones morbosas imputables al uso indiscriminado de fármacos: enfermedades de la piel, del sistema nervioso, del aparato digestivo y, sobre todo, enfermedades de la sangre. No es cuestión solamente de un uso inconveniente de los fármacos, ni siquiera de su abuso. A menudo se trata de una verdadera intolerancia del organismo.

El peligro no es de despreciar porque, aún la más cuidadosa y concienzuda investigación farmacológica, no excluye totalmente un riesgo potencial. El ejemplo trágico de la talidomida lo atestigua. Aún con la intención de ayudar, el médico puede perjudicar involuntariamente el derecho del individuo sobre su propia vida. La investigación farmacológica y la aplicación terapéutica deben pues estar sumamente atentas a las normas éticas que prevalecen sobre la tutela de tal derecho.

5. El razonamiento nos ha llevado a tocar un argumento muy discutido hoy, el de la experimentación. También aquí el reconocimiento de la dignidad de la persona y de la norma ética que de él se deriva, como valor superior en el cual debe inspirarse la investigación científica, tiene consecuencias precisas a nivel deontológico. La experimentación farmacológica-clínica no puede iniciarse sin haber tomado todas las precauciones para garantizar la inocuidad de la aplicación. La fase preclínica de la investigación debe, pues, proporcionar la más amplia documentación fármaco-toxicológica.

Es obvio, por otra parte, que el paciente debe ser informado de la experiencia de su fin, y de los eventuales riesgos que comporta, de tal modo que pueda dar o rehusar su propia autorización con pleno conocimiento y libertad. El médico en efecto, tiene sobre el paciente solamente aquel poder y aquellos derechos que el mismo paciente le confiera.

El consentimiento por parte del enfermo no es, pues, ilimitado. Mejorar las propias condiciones de salud sigue siendo, salvo casos particulares, la finalidad esencial de la colaboración por parte del enfermo. La experimentación, en efecto, se justifica «in primis» como el interés del individuo, no con el de la colectividad. Esto no excluye, sin embargo, que dejando a salvo la propia integridad sustancial, el paciente pueda legítimamente asumir una parte del riesgo para contribuir con su iniciativa al progreso de la medicina y, así, al bien de la comunidad. La ciencia médica se sitúa, en efecto, en la comunidad que libera al hombre de las enfermedades que lo atenazan y de las fragilidades psicosomáticas que lo humillan. Dar algo de sí mismo dentro de los límites trazados por la norma moral, puede constituir un testimonio de caridad altamente meritorio y una ocasión de elevación espiritual tan significativa como para poder compensar el riesgo de una eventual disminución física no sustancial.

6. Las consideraciones expuestas en cuestión de investigación farmacológica y de terapia médica pueden extenderse a otros campos de la médica. Más frecuentemente de lo que pueda creerse en el ámbito mismo de la asistencia al enfermo se puede perjudicar su derecho personal a la integridad psico-física ejerciendo, de hecho, violencia: en la investigación diagnóstica mediante complejos procedimientos y no raramente traumatizantes, en el tratamiento quirúrgico que se orienta ya a realizar las más osadas intervenciones de destrucción y de reconstrucción, en el caso de los trasplantes de órganos, en la investigación médica aplicada, en la misma organización hospitalaria.

No es posible afrontar ahora completamente una temática tal, cuyo examen nos llevaría lejos, imponiéndonos el interrogarnos sobre el tipo de medicina hacia el cual se quiere orientar: si el de una medicina al servicio de la pura tecnología y de la eficientísima organización.

Es preciso empeñarse en una «repersonalización» de la medicina que, llevando nuevamente a una consideración más unitaria del enfermo, ayude a establecer con él una relación más humanizada, capaz de no romper

el lazo entre la esfera psicoafectiva y su cuerpo doliente. La relación médico-enfermo debe volver a basarse sobre un diálogo hecho de atención, respeto e interés: debe volver a ser un auténtico encuentro entre dos hombres libres o, como ya se ha dicho, entre una «confianza» y una «conciencia».

Esto permitirá al enfermo sentirse comprendido por lo que él verdaderamente es: un individuo que tiene dificultades en el uso de su propio cuerpo o en el desarrollo de sus propias facultades pero que conserva intacta la íntima esencia de su humanidad cuyos derechos a la verdad y al bien, tanto en el plano humano como en el religioso, espera sean respetados [...].

**MENSAJE DE JUAN PABLO II, DEL 1-I-81, CON MOTIVO
DE LA «JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ»**

A todos vosotros, artífices de la paz,

A vosotros, responsables de las naciones,

A vosotros hermanos y hermanas, ciudadanos del mundo,

A vosotros, los jóvenes, que soñáis con un mundo mejor.

A vosotros, los hombres y mujeres de buena voluntad, me dirijo hoy para invitaros, con motivo de la XIV Jornada mundial de la paz (1 enero 1981), a reflexionar acerca de la situación del mundo y de la gran causa de la paz. Lo hago impulsado por una profunda convicción: la paz es posible, pero es a la vez una conquista continua, un bien que debe ser realizado mediante esfuerzos renovados sin cesar. Cada generación percibe de una manera nueva la exigencia permanente de la paz frente a los problemas cotidianos de su existencia. Sí, cada día el ideal de la paz debe ser traducido en una realidad concreta por cada uno de nosotros.

Para servir a la Paz, respeta la Libertad

1. Si yo os presento hoy como objeto de vuestras reflexiones el tema de la libertad, lo hago en la línea del Papa Juan XXIII, en su encíclica *Pacem in terris*, donde proponía la libertad como uno de los «cuatro pilares que sostienen el edificio de la paz». La libertad responde a una aspiración profunda y generalizada del mundo contemporáneo; prueba de ello, entre otras, es el uso frecuente que se hace de ese término de «libertad», aunque el mismo no siempre es empleado en el mismo sentido por los creyentes y los ateos, por los hombres de ciencia y los economistas, por los que viven en una sociedad democrática y los que soportan un régimen totalitario. Cada uno le da un matiz especial e incluso una significación muy diferente. Tratando de ampliar nuestro ser-

vicio a la paz, nos es pues muy necesario comprender cuál es la verdadera libertad que es a la vez raíz y fruto de la paz.

Condicionamientos que aconsejan hoy un nuevo planteamiento del tema

2. La paz debe realizarse en la verdad; debe construirse sobre la justicia; debe estar animada por el amor; debe hacerse en la libertad (cfr. *Pacem in terris*). Sin un respeto profundo y generalizado de la libertad, la paz escapa al hombre. No tenemos más que mirar en derredor nuestro para convencernos. Porque el panorama que se abre ante nuestros ojos, en este principio de los años ochenta, no se presenta muy tranquilizador. En efecto, mientras muchos hombres y mujeres, simples ciudadanos o dirigentes responsables, se preocupan vivamente por la paz —a veces hasta llegar a la angustia—, sus aspiraciones no se concretizan en una paz verdadera a causa de la falta de libertad o de la violación de la misma, como también por la manera ambigua o errónea en la que es ejercida.

Porque ¿cuál puede ser la libertad de unas naciones cuya existencia, aspiraciones y reacciones están condicionadas por el miedo en vez de la confianza mutua, por la opresión en vez de la libre búsqueda del bien común? La libertad es herida, cuando las relaciones entre los pueblos se fundan no sobre el respeto de la dignidad igual de cada uno, sino sobre el derecho del más fuerte, sobre la actitud de bloques dominantes y sobre imperialismos militares o políticos. La libertad de las naciones es herida, cuando se obliga a las pequeñas naciones a alinearse con las grandes para ver asegurado su derecho a la existencia autónoma o su supervivencia. La libertad es herida, cuando el diálogo entre compañeros iguales no es posible a causa de las dominaciones económicas o financieras ejercidas por las naciones privilegiadas y fuertes.

Y dentro de una nación, a nivel político, ¿tiene la paz una suerte real, cuando no está garantizada la libre participación en las decisiones colectivas o el libre disfrute de las libertades individuales? No hay verdadera libertad —fundamento de la paz—, cuando todos los poderes están concentrados en manos de una sola clase social, de una sola raza, de un solo grupo; o cuando el bien común es confundido con los intereses de un solo partido que se identifica con el Estado. No hay verdadera libertad, cuando las libertades de los individuos son absorbidas por una colectividad «negando al mismo tiempo toda trascendencia al hombre y a su historia personal y colectiva» (*Carta Octogesima adveniens*, n. 26). La verdadera libertad está igualmente ausente cuando formas diversas de anarquía erigida en teoría llevan a rechazar o contestar sistemáticamente toda autoridad, confinando, en el extremo, con terrorismos políticos o violencias obcecadas, espontáneas u organizadas. Tampoco existe ya verdadera libertad, cuando la seguridad interna es erigida en norma única y suprema de las relaciones entre la autoridad y los ciudadanos, como si ella fuera el único y principal medio de mantener la paz. No puede

ignorarse, en este contexto, el problema de la represión sistemática o selectiva —acompañada de asesinatos y torturas, de desapariciones y exilios— de la cual son víctimas tantas personas, incluidos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos cristianos comprometidos en el servicio al prójimo.

3. A nivel social, difícilmente puede calificarse de verdaderamente libres a hombres y mujeres que no tienen la garantía de un empleo honesto y remunerado o que, en tantos pueblos rurales, siguen estando sometidos a servidumbres deplorables, que son a veces la herencia de un pasado de dependencia o de una mentalidad colonial. Tampoco existe ya suficiente libertad para aquellos y aquellas que, tras un desarrollo industrial, urbano o burocrático incontrolado, se ven envueltos por un gigantesco engranaje, por un conjunto de mecanismos no queridos o no dominados que no dejan ya el espacio necesario para un desarrollo social digno del hombre. La libertad queda en primer lugar reducida, más de lo que parece, en una sociedad que se deja guiar por el dogma del crecimiento material indefinido, por la carrera a la posesión o la carrera a los armamentos. La crisis económica actual que alcanza a todas las sociedades corre el riesgo de provocar, si no ha sido confrontada con postulados de otro orden, medidas que restringirán todavía más el espacio de libertad del que la paz tiene necesidad para brotar y florecer.

A nivel del espíritu, la libertad puede seguir sufriendo manipulaciones de muchos tipos. Por ejemplo, cuando los medios de comunicación social abusan de su poder sin preocuparse de la objetividad rigurosa. Por ejemplo también, cuando se aplican procedimientos psicológicos sin tener en cuenta la libertad de la persona. Por otra parte, la libertad seguirá siendo muy incompleta, o al menos difícil de ejercer, en hombres, mujeres y niños para quienes el analfabetismo constituye una suerte de esclavitud cotidiana en una sociedad que supone la cultura.

En el umbral del año 1981, proclamado por las Naciones Unidas Año de la persona minusválida, es conveniente finalmente incluir en este cuadro a nuestros hermanos y hermanas que han sido perjudicados en su integridad física o en su espíritu. Nuestra sociedad, ¿es suficientemente consciente de su deber de poner en obra los medios que le permitan participar más libremente en la vida en común, tener acceso al desarrollo humano que corresponde a sus derechos de persona humana y a sus posibilidades, en la dignidad?

Esfuerzos alentadores y realizaciones meritorias

4. Pero, al lado de estos ejemplos típicos donde los condicionamientos más o menos graves son un obstáculo al justo despliegue de la libertad, y que podrían ser cambiados, hay también otro aspecto, positivo aquel, en el cuadro del mundo contemporáneo que busca la paz en la libertad. Es la imagen de una muchedumbre de hombres y mujeres que

creen en este ideal, que se empeñan por poner la libertad al servicio de la paz, por respetarla, por promoverla, por reivindicarla y defenderla, y que están dispuestos a los esfuerzos y aún a los sacrificios que este empeño exige. Pienso en todos cuantos Jefes de Estado y de Gobierno, hombres políticos, funcionarios internacionales y responsables civiles a todos los niveles, se esfuerzan por hacer accesible a todos las libertades solemnemente proclamadas. Mi pensamiento se dirige también a todos aquellos y aquellas que saben que la libertad es indivisible y que, consecuentemente, no dejan de señalar, con toda objetividad, en las situaciones cambiantes, los nuevos ataques contra la libertad en el ámbito de la vida personal, de la familia, de la cultura, del desarrollo socio-económico y de la vida política. Pienso en los hombres y en las mujeres del mundo entero, enamorados de una solidaridad sin fronteras, para quienes es imposible, en una civilización mundial, aislar sus propias libertades de las que sus hermanos y hermanas en otros continentes se esfuerzan por conquistar o defender. Pienso de modo especial en los jóvenes que creen que no se llega a ser verdaderamente libre sino es esforzándose por procurar a los demás la misma libertad.

El arraigo de la libertad en el hombre

5. La libertad en su esencia es interior al hombre, connatural a la persona humana, signo distintivo de su naturaleza. La libertad de la persona encuentra, en efecto, su fundamento en su dignidad transcendente: una dignidad que le ha sido regalada por Dios, su Creador, y que le orienta hacia Dios. El hombre, dado que ha sido creado a imagen de Dios (cfr. *Gén.* 1,27), es inseparable de la libertad, de esa libertad que ninguna fuerza o apremio exterior podrá jamás arrebatar y que constituye su derecho fundamental, tanto como individuo cuanto como miembro de la sociedad. El hombre es libre porque posee la facultad de determinarse en función de lo verdadero y del bien. El es libre, dado que posee la facultad de elección, «movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa» (Constitución *Gaudiun et Spes*, n. 17). Ser libre, es poder y querer elegir, es vivir según su propia conciencia.

Promover hombres libres en una sociedad de libertad

6. El hombre debe pues poder hacer sus elecciones en función de los valores a los cuales da su adhesión; se mostrará responsable en ello, y corresponde a la sociedad favorecer esta libertad, teniendo en cuenta el bien común.

El primero de estos valores y el más fundamental es siempre su relación con Dios expresado en sus convicciones religiosas. La libertad religiosa se transforma así en la base de las demás libertades. En vísperas

de la reunión de Madrid sobre la seguridad y la cooperación en Europa, pude repetir lo que no cese de afirmar desde el comienzo de mi ministerio: «la libertad de conciencia y de religión... es... un derecho primario e inalienable de la persona; más aún, en la medida en la que ella alcanza la esfera más íntima del espíritu, se puede incluso decir que sostiene la razón de ser, íntimamente anclada en cada persona, de las restantes libertades» (*La libertad religiosa y el Acta final de Helsinki*, n. 5; cfr. *L'Osservatore Romano*, 15 de noviembre de 1980).

Las diferentes instancias responsables de la sociedad deben hacer posible el ejercicio de la verdadera libertad en todas sus manifestaciones. Ellas deben intentar garantizar a cada hombre y a cada mujer la posibilidad de realizar plenamente su potencial humano. Ellas deben reconocerles un espacio autónomo, jurídicamente protegido, para que todo ser humano pueda vivir, solo o colectivamente, según las exigencias de su conciencia. Tal libertad, por otra parte, es invocada en los más importantes documentos y pactos internacionales, como la Declaración universal de los Derechos del hombre y las Convenciones internacionales referentes al mismo tema, así como también por la gran mayoría de las Constituciones nacionales. Esto no es nada más que justicia, porque el Estado, como portador del mandato de los ciudadanos, no solamente debe reconocer las libertades fundamentales de las personas, sino protegerlas y promoverlas. Este cometido positivo, lo realizará respetando la regla del derecho y buscando el bien común conforme a las exigencias de la ley moral. De la misma manera, los grupos intermedios libremente constituidos contribuirán, a su modo, a la salvaguardia y a la promoción de las libertades. Esta noble tarea concierne a todas las fuerzas vivas de la sociedad.

7. Pero la libertad, no es sólo un derecho que se reclama para uno mismo, es un deber que se asume cara a los otros. Para servir verdaderamente a la paz, la libertad de cada ser humano y de cada comunidad humana debe respetar las libertades y los derechos de los demás, individuales o colectivos. Ella encuentra en este respeto su límite, pero además su lógica y su dignidad, porque el hombre es por naturaleza un ser social.

Ciertas formas de «libertad» no merecen verdaderamente este nombre, y es necesario vigilar para defender la libertad contra las falsificaciones de diversos tipos. Por ejemplo, la sociedad de consumo —ese exceso de bienes no necesarios al hombre— puede constituir, en cierto sentido, un abuso de la libertad, cuando la búsqueda cada vez más insaciable de bienes no está sometida a la ley de la justicia, y del amor social. Tal práctica del consumo entraña, de hecho, un límite de la libertad de los demás; e incluso, en la perspectiva de la solidaridad internacional, ella afecta a sociedades enteras que no pueden disponer del mínimo de bienes necesarios para sus necesidades esenciales. La existencia de zonas de pobreza absoluta en el mundo, la existencia del hambre y de la desnutrición no dejan de poner una grave interrogación a los países

que se han desarrollado libremente sin tener en cuenta a los que no tenían el mínimo y hasta es posible que a expensas de ellos. Se podría incluso decir que en el interior de los países ricos, la búsqueda incontrolada de bienes materiales y de servicios de todo género ofrece solamente en apariencia más libertad a los que se benefician de ello, porque propone como valor humano fundamental la posesión de cosas, en lugar de apuntar a un cierto bienestar material como condición y medio de pleno desarrollo de los talentos del hombre en colaboración y armonía con sus semejantes.

Asimismo una sociedad construida sobre una base puramente materialista niega al hombre su libertad, cuando somete las libertades individuales a las exigencias económicas, cuando reprime la creatividad espiritual del hombre en nombre de una falsa armonía ideológica, cuando rehúsa a los hombres el ejercicio de su derecho de asociación, cuando reduce prácticamente a la nada la facultad de participar en la vida pública o se comporta de tal manera en este ámbito que el individualismo y el absentismo cívico o social terminan por ser una actitud general.

Finalmente, la verdadera libertad no es promovida tampoco en la sociedad permisiva, que confunde la libertad con la licencia de hacer cualquier opción y que proclama, en nombre de la libertad, una especie de amoralidad general. Es proponer una caricatura de la libertad pretender que el hombre es libre para organizar su vida sin referencia a los valores morales y que la sociedad no está para asegurar la protección y la promoción de los valores éticos. Semejante actitud es destructora de la libertad y de la paz. Existen múltiples ejemplos de esta concepción errónea de la libertad, como la eliminación de la vida humana por el aborto aceptado o legalizado.

Promover unos pueblos libres en un mundo libre

8. El respeto a la libertad de los pueblos y de las naciones es una parte integrante de la paz. Las guerras no han cesado de estallar y la destrucción ha golpeado pueblos y culturas enteras porque la soberanía de un pueblo o de una nación no había sido respetada. Todos los continentes han sido testigos y víctimas de guerras y de luchas fratricidas, provocadas por la tentativa de una nación de limitar la autonomía de la otra. Se puede también preguntar si la guerra no se arriesga a llegar a ser —o permanecer— un dato normal de nuestra civilización, con los conflictos armados «limitados» que se prolongan sin que la opinión pública se maraville, o con la sucesión de guerras civiles. Las causas directas o indirectas son múltiples y complejas: expansión territorial, imperialismo ideológico, para el triunfo del cual se acumulan armas de destrucción total, explotación económica que hay que perpetuar, obsesión por la seguridad territorial, diferencias étnicas explotadas por los mercaderes de armas, y muchas otras. Sea cual fuere la razón, estas guerras contienen unos elementos de injusticia, de desprecio o de odio, y de atentado a la libertad. Ya lo subrayé el año pasado en la Asamblea General de las

Naciones Unidas: «El espíritu de guerra, en su significado primitivo y fundamental *brotó y maduró allí donde son violados los derechos inalienables del hombre*. Esta es una nueva perspectiva, profundamente actual, más profunda y radical, de la causa de la paz. Es una perspectiva que ve la génesis de la guerra y, en cierto sentido, su contenido en las formas más complejas que derivan de la injusticia, considerada bajo todos sus distintos aspectos; esta injusticia atenta primeramente contra los derechos del hombre y por eso corta la armonía del orden social, repercutiendo a continuación en todo el sistema de las relaciones internacionales» (n. 11).

9. Sin la voluntad de respetar la libertad de cada pueblo, de toda nación o cultura, y sin un consenso global a este respecto, será difícil crear condiciones de paz. Por lo tanto hay que tener el coraje de tender hacia ellas. Por parte de cada nación y de sus gobernantes, esto supone un empeño consciente y público a renunciar a las reivindicaciones y a los desig-nios que causan daño a las demás naciones, dicho de otro modo, esto supone el rechazo a seguir toda doctrina de supremacía nacional o cultural. Hay que respetar también la marcha interna de las otras naciones, reconocer su personalidad en el seno de la familia humana, y en consecuencia estar dispuestos a poner en causa y a corregir toda política que, en el ámbito económico, social y cultural, sería de hecho una injerencia o una explotación. En este contexto, yo quisiera interceder para que la comunidad de naciones se esfuerce más en ayudar a las naciones jóvenes o aún en vía de desarrollo a alcanzar el verdadero dominio de sus propias riquezas y la autosuficiencia en materia alimentaria así como las necesidades vitales esenciales. Pido a los países ricos que orienten su ayuda hacia la preocupación primera de eliminar activamente la pobreza absoluta.

La preparación inmediata de instrumentos jurídicos tiene su puesto en el mejoramiento de las relaciones entre las naciones. Para respetar la libertad, hay que contribuir también a la codificación progresiva de las aplicaciones que emanan de la Declaración universal de los Derechos del hombre. Dentro del respeto a la identidad de los pueblos, quisiera incluir particularmente el derecho de cada pueblo a ver sus tradiciones religiosas respetadas en el interior y por parte de las restantes naciones, y el derecho a participar en los libres intercambios dentro del ámbito religioso, cultural, científico y educativo.

En un clima de confianza y de responsabilidad

10. La mejor garantía de la libertad y de su realización efectiva descansa en la responsabilidad de las personas y de los pueblos, en los esfuerzos que cada uno despliega concretamente, según sus alcances, dentro de su ambiente inmediato, en el plano nacional e internacional. Porque la libertad no es algo que se regala. Ella debe ser conquistada sin cesar. Ella va pareja con el sentido de responsabilidad que incumbe a cada uno. No

se hace libres a los hombres sin hacerlos al mismo tiempo más conscientes de las exigencias del bien común y más responsables.

Por esto mismo, es necesario hacer surgir y reforzar un clima de confianza mutua, sin el cual la libertad no puede desplegarse. Es sabido a todo el mundo que esto es condición indispensable para la verdadera paz y su primera expresión. Pero, lo mismo que la libertad y que la paz, esta confianza no es un don: debe ser adquirida, debe ser merecida. Cuando un individuo no asume su responsabilidad por el bien común, cuando una nación no se siente corresponsable de la suerte del mundo, la confianza está comprometida. Con mayor razón, si uno utiliza a los demás para los propios objetivos egoístas, o simplemente si uno se abandona a maniobras que miran a hacer prevalecer los propios intereses por encima de los intereses legítimos de los demás. Solamente la confianza merecida por acciones concretas en favor del bien común hará posible, entre las personas y las naciones, el respeto a la libertad que es servicio a la paz.

La libertad de los hijos de Dios

11. Para terminar, permitid que me dirija más concretamente a los que están unidos a mí por la creencia en Cristo. El hombre no puede ser auténticamente libre ni promover la verdadera libertad, si no reconoce y no vive la trascendencia de su ser por encima del mundo y su relación con Dios, pues la libertad es siempre la del hombre creado a imagen de su Creador. El cristiano encuentra en el evangelio el apoyo y la profundización de esta convicción. Cristo, Redentor del hombre, hace libres. «Si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres», refiere el apóstol Juan (8, 36). Y el apóstol Pablo añade: «Allí donde está el espíritu del Señor, allí está la libertad» (2 Cor. 3, 17). Ser liberado de la injusticia, del miedo, del apremio, del sufrimiento, no serviría de nada, si se permanece esclavo allá en lo hondo de los corazones, esclavo del pecado. Para ser verdaderamente libre, el hombre debe ser liberado de esta esclavitud y transformado en una nueva creatura. La libertad radical del hombre se sitúa pues al nivel más profundo: el de la apertura a Dios por la conversión del corazón, ya que es en el corazón del hombre donde se sitúan las raíces de toda sujeción, de toda violación de la libertad. Finalmente, para el cristiano, la libertad no proviene del mismo hombre: se manifiesta en la obediencia a la voluntad de Dios y en la fidelidad a su amor. Es entonces cuando el discípulo de Cristo encuentra la fuerza de luchar por la libertad en este mundo. Ante las dificultades de esta tarea, no se dejará llevar por la inercia ni el desaliento, ya que pone su esperanza en Dios que sostiene y hace fructificar lo que se realiza en el espíritu.

* * *

La libertad es la medida de la madurez del hombre y de la nación. Así pues, no puedo terminar este mensaje sin renovar la llamada urgente

que hice al principio: al igual que la paz, la libertad es un esfuerzo que hay que emprender sin cesar para dar al hombre su plena humanidad. No esperemos pues la paz en el equilibrio del terror. No aceptemos la violencia como camino de la paz. Comencemos más bien por respetar la verdadera libertad: la paz que resultará de ahí será capaz de colmar la esperanza del mundo, pues estará hecha de justicia, estará fundada en la incomparable dignidad del hombre libre.

Vaticano, 8 de diciembre de 1980.

DISCURSO DE JUAN PABLO II, DEL 17-XI-80, A LA CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA

[...] 9. *Empeñaos en pro de los derechos del hombre y de los sólidos fundamentos de la convivencia humana en vuestra sociedad.*

Vivís en una sociedad en la que se asegura un alto grado de defensa de la libertad y de la dignidad humana. Estad agradecidos por ello, pero no permitáis que, en nombre de la libertad, se propague una laxitud que permita disponer de la inviolabilidad de la vida de cada hombre, incluido el que aún no ha nacido. ¡Empeñaos igualmente en pro de la dignidad y el derecho del matrimonio y de la familia! ¡Sólo el respeto de los indeclinables derechos y valores fundamentales garantiza aquella libertad que no desemmboca en la autodestrucción! Pensad en esto: ya que derecho y moralidad no son lo mismo, tanto más urgente es la *protección jurídica de las fundamentales convicciones morales* [...].

DISCURSO DE JUAN PABLO II, DEL 12-I-1981, AL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO ANTE LA SANTA SEDE

[...]

11. La Santa Sede tiene la convicción de que sobre todo ha de reforzarse «el alma de la paz», es decir, una relación mejor entre los Estados, que se obtiene mejorando la condición humana de las personas y de los pueblos en el uso de sus libertades y de sus derechos fundamentales, tal como los presentan las diversas civilizaciones. Para esto, la Santa Sede, igual que participó en la *Conferencia de Helsinki* sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, participa en la reunión que se celebra actualmente en *Madrid*. Es lógico que, en un contexto semejante, en *Madrid* como antes en *Helsinki* y en *Belgrado*, la voz de la Santa Sede se alce en favor del respeto de *la libertad religiosa, elemento fundamental*

para la paz de los espíritus. He querido consagrar a este tema una reflexión especial en un documento enviado a los Jefes de Estado de los Países que firmaron el Acta Final de Helsinki, reflexión aplicable también, en mi opinión, en un plano internacional más vasto, a otros países y continentes.

No se puede hablar de la libertad religiosa, la forma de libertad espiritual más elevada que pueda germinar en el humus de la civilización y de la cultura, si se hace abstracción del principio que he recordado varias veces, a saber, que el hombre, integralmente considerado, es el primer sujeto de la cultura, siendo su único objeto y su fin (cfr. Discurso a la UNESCO, núm. 7: AAS 72, 1980, pág. 738: *L'Osservatore Romano*, Edición en Lengua Española, 15 de junio de 1980, pág. 11). Cuando se viola la libertad religiosa, se la oprime, se la limita, se la ahoga, se hace al hombre la mayor de las afrentas, pues la dimensión espiritual y religiosa es aquella a partir de la cual se mide toda otra grandeza humana. En efecto, un lazo fundamental une la religión en general, y particularmente el cristianismo, con las formas más altas de la cultura (cfr. n.º 9: AAS 72, 1980, pág. 740; *L'Osservatore Romano*, Edición en Lengua Española, 15 de junio de 1980, pág. 12). De ello dan fe los incontables testimonios entre los cuales basta con recordar, para Europa, la influencia determinante que la figura y la obra de los Santos Patronos de nuestro continente tuvieron sobre el desarrollo espiritual y material de pueblos tan diversos, y sin embargo, íntimamente ligados por intereses espirituales comunes, a los cuales consagraron su vida aquellos hombres extraordinarios que fueron San Benito, los Santos Cirilo y Metodio en Oriente. Y me es grato evocar su recuerdo aquí, en este encuentro de hoy, habiendo celebrado al primero en diversas circunstancias solemnes a lo largo del pasado año, con ocasión del décimoquinto centenario de su nacimiento, y habiendo sido los segundos recientemente proclamados también ellos Patronos de Europa, acontecimiento acogido favorablemente en este continente y en el mundo.

Por lo demás, hay que destacar que la herencia espiritual que caracteriza a los otros continentes —con modelos culturales e históricos diferenciados en todo caso— encuentra también su origen y su explicación en la inspiración religiosa, humanista y ética, de las diferentes religiones, como subrayé también en la UNESCO (cfr. n. 9: AAS 72, 1980, pág. 740; *L'Osservatore Romano*, Edición en Lengua Española, 15 de junio de 1980, pág. 12).

12. Querría añadir otra reflexión a propósito del plano espiritual, que se refiere al desarrollo del hombre en su integridad y también al progreso de los pueblos. En mi reciente Encíclica *Dives in misericordia*, he puesto de relieve que, entre las causas de inquietud que asaltan al hombre contemporáneo, hay «una especie de abuso de la idea de justicia» e incluso «una alteración práctica» debidos al hecho de que «no raras veces los programas que parten de la idea de justicia y que deben servir a ponerla en práctica en la convivencia de los hombres, de los grupos y

de las sociedades humanas, en la práctica sufren deformaciones. Por más que sucesivamente recurran a la misma idea de justicia, sin embargo la experiencia demuestra que otras fuerzas negativas, como son el rencor, el odio e incluso la crueldad, han tomado la delantera a la justicia. En tal caso el ansia de aniquilar al enemigo, de limitar su libertad y hasta de imponerle una dependencia total, se convierte en el motivo fundamental de la acción; esto contrasta con la esencia de la justicia, la cual tiende por naturaleza a establecer la igualdad y la equiparación entre las partes en conflicto» (*Dives in misericordia*, 12 *L'Osservatore Romano*, Edición en Lengua Romana, 7 de diciembre de 1980, pág. 9).

Semejante «alteración» de la justicia es una experiencia que la humanidad hace todavía hoy a través de las guerras, las revoluciones o las crisis internacionales, y que hace difícil, si no imposible, el progreso de soluciones pacíficas adecuadas, estables y conformes con la dignidad natural de lo pueblos. Podría aplicarse este criterio a casi todas las crisis, y en particular a aquéllas que parecen insolubles o crónicas. Entre éstas, debe citarse como típica *el problema de Oriente Medio*. Efectivamente, ¿cómo puede pensarse en la implantación de una paz estable, si no se tienen en cuenta, en igual medida, las exigencias de *todos* los pueblos interesados, de su existencia y de su seguridad, como también de la posibilidad de poner las bases de una colaboración futura?

Así, es evidente que la reivindicación, con sus pretensiones absolutas, jamás conducirá, por su propio derecho, a la paz, porque esta reivindicación presupone la negación, o la disminución excesiva, del derecho del otro; solamente la *equidad*, es decir, la capacidad de equilibrar ventajas y renunciaciones en cada una de las partes interesadas, puede abrir la vía de un acuerdo global, que haga posible la vida en común. Esto significa que, como decía en la Encíclica, no hay justicia si ésta no es completada por el amor. Una actitud de espíritu así resulta más fácil si se reconoce que los pueblos, como las personas, tienen bienes *propios* y bienes *comunes*, y que estos últimos no son divisibles, sino que hay que *disfrutarlos juntos*, en la experiencia de una colaboración leal y confiada.

13. Se observa una alteración de la justicia también *en el proceso de ciertas revoluciones* cuando, para transformar una situación social, considerada injusta, y que muchas veces lo es efectivamente, se pretende imponer un régimen ideológico contradictorio con las convicciones religiosas y éticas, antiguas y profundas, de los pueblos interesados. Pero, dejando aparte el hecho de que no se pueden canjear bienes espirituales por bienes materiales, se trata de un falso dilema, ya que es un deber de conciencia, para quien se inspira en una concepción cristiana; el promover eficazmente la justicia salvaguardando la fe y la libertad, así como los demás bienes espirituales de un pueblo. No se puede traicionar la identidad y la soberanía de los pueblos, pues nacen del patrimonio espiritual propio de cada uno de ellos, fundamentado en la dignidad y la nobleza, valores éstos superiores a cualquier interés de partido. Hago votos porque ciertas regiones del mundo, actualmente agitadas por la violencia, tales como

América Latina, encuentran en sus raíces espirituales y humanas la sabiduría y la fuerza necesaria para avanzar hacia un sano progreso, que no reniegue del pasado y que sea garante de una verdadera civilización [...].

**DISCURSO DE JUAN PABLO II, DEL 15-I-81, A LA DELEGACION
DE LOS SINDICATOS INDEPENDIENTES POLACOS**

[...]

El trabajo es el esfuerzo del hombre. Es la actividad consciente y personal del hombre; es su aportación a la gran obra de las generaciones, la obra del mantenimiento y progreso de la humanidad, de las naciones y las familias. Es evidente que los hombres que desempeñan un trabajo determinado tienen derecho *a asociarse libremente* por razón de dicho trabajo, a fin de que se les garanticen todos los bienes a los que el trabajo debe enderezarse. Se trata de uno de los derechos fundamentales de la persona, del derecho del hombre en cuanto sujeto propio del trabajo que «dominando» la tierra (por usar palabras bíblicas) cabalmente por medio del trabajo, quiere al mismo tiempo que en el ambiente de trabajo y en la relación con éste, la vida humana en la tierra «sea verdaderamente humana» y «cada vez más humana» (como leemos en los textos del último Concilio) [...].

HOMILIA DE JUAN PABLO II, DEL 26-IV-1981, EN BERGAMO

[...]

El *primero de estos valores es el amor fiel* de los mismos esposos, como fuente de su confianza recíproca y también de la confianza de los hijos hacia ellos. Sobre esta confianza como sobre una roca se basa toda la sutil construcción interior de la familia, toda la «arquitectura de las almas», que se irradia con una humanidad madura sobre las generaciones nuevas.

El *segundo valor* fundamental es *el respeto a la vida* desde el momento de su concepción bajo el corazón de la madre.

6. Es oportuno al respecto que la figura del Papa Juan, del «Papa bueno» de Angelo Giuseppe Roncalli, hijo de esta tierra bergamasca, se eleve ante toda la Iglesia y en particular ante esta nación, en la que vio la luz;

— se eleve con toda la verdad de su mensaje evangélico, que es al

mismo tiempo un mensaje tan humano; él, tan lleno de solicitud por el bien de su patria, por el bien de toda nación y de todo hombre,

— se eleve ante nosotros y esté presente en medio de nosotros.

Permitid, pues, que ante él —ante su figura— repita yo las palabras que pronuncié en el V domingo de Cuaresma:

«Efectivamente, existe en nuestra época una *amenaza* creciente *al valor de la vida*. Esta amenaza que, sobre todo, se hace notar en las sociedades del progreso técnico, de la civilización material y del bienestar, plantea un interrogante a la misma *autenticidad humana* de ese *progreso*. Quitar la vida significa siempre que el hombre ha perdido la confianza en el valor de su existencia; que ha destruido en sí, en su conocimiento, en su conciencia y voluntad, ese *valor primario y fundamental*.

Dios dice: “No matarás” (Ex. 20, 13). Y este mandamiento es al mismo tiempo el principio fundamental y la norma del código de la moralidad inscrito en la conciencia de cada hombre.

Si se concede derecho de ciudadanía al asesinato del hombre cuando todavía está en el seno de la madre, entonces, por esto mismo, se nos pone en el resbaladero de incalculables consecuencias de naturaleza moral. Si es lícito quitar la vida a un ser humano, cuando es el más débil, totalmente dependiente de la madre, de los padres, del ámbito de las conciencias humanas, entonces se asesina *no sólo a un hombre inocente, sino también a las conciencias mismas*. Y no se sabe lo amplia y velozmente que se propaga el radio de esa destrucción de las conciencias, sobre las que se basa, ante todo, el sentido más humano de la cultura y del progreso del hombre.

Si aceptamos el derecho a quitar el don de la vida al hombre aún no nacido, ¿lograremos defender después el derecho del hombre a la vida en todas las demás situaciones? ¿Lograremos detener el proceso de destrucción de las conciencias humanas?» (*L'Osservatore Romano*, Edición en Lengua Española, 12 de abril de 1981, pág. 1). [...].

MENSAJE DE JUAN PABLO II, DEL 10-V-1981, EN LA XV JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Queridísimos hermanos y hermanas:

La XV Jornada mundial de las Comunicaciones Sociales, fijada para el domingo 31 de mayo de 1981, tiene como tema: «Las comunicaciones sociales al servicio de la libertad responsable del hombre». A tan importante tema tengo intención de dedicar este mensaje, que dirijo a los hijos de la Iglesia católica y a todos los hombres de buena voluntad.

1. En la continua expansión y progreso de los *mass-media* se puede descubrir un «signo de los tiempos», que constituye un inmenso poten-

cial de universal comprensión y un fortalecimiento de premisas para la paz y la fraternidad entre los pueblos.

Justamente Pío XII, de venerada memoria, en la Encíclica *Miranda prorsus*, del 8 de septiembre de 1957, hablaba de estos «medios», clasificándolos como «inventos maravillosos de los cuales se glorían nuestros tiempos», y veía en ellos «un don de Dios». El Decreto *Inter mirifica* del Concilio Ecuménico Vaticano II, al reforzar este concepto, subrayaba las posibilidades de estos medios que, «por su naturaleza están en condiciones de alcanzar y mover no sólo los individuos, sino las mismas multitudes y toda la sociedad humana».

La Iglesia, al tomar conciencia de las enormes posibilidades de los *mass-media*, ha añadido siempre, a una valoración positiva, el reclamo a consideraciones que no se detengan solamente en una evidente exaltación, sino que hagan reflexionar y considerar que la fuerza de sugestión de estos «medios» ha tenido y tendrá sobre el hombre especiales influencias que habrá que tener muy en cuenta. El hombre, también en relación con los *mass-media*, está llamado a ser «él mismo»: o sea, libre y responsable, «usuario» y no «objeto», «crítico» y no «pasivo».

2. En el curso de mi «servicio pastoral», he llamado repetidamente la atención sobre esa «visión del hombre» como «persona libre», la cual, fundada en la divina Revelación, es confirmada y reclamada por la misma naturaleza como una necesidad vital: visión que en la actualidad resulta todavía más indispensable, tal vez también como reacción a los peligros que corre y a las amenazas que sufre o teme.

En el «Mensaje» enviado con motivo de la «Jornada mundial de la Paz», al abrirse este año 1981, quise llamar la atención sobre la libertad como condición necesaria para la consecución de la paz: libertad de los individuos, de los grupos, de las familias, de los pueblos, de las minorías étnicas, lingüísticas, religiosas.

De hecho el hombre se realiza a sí mismo en la libertad. Y a esta realización cada vez más plena, debe tender, sin detenerse únicamente en exaltaciones verbales o retóricas, como ocurre demasiado a menudo, sin dar la vuelta al mismo sentido de la libertad y sin «cultivar de mala manera, como si todo fuera lícito a condición de que guste, incluido el mal» —como reafirma la Constitución pastoral del Concilio Vaticano II *Gaudium et spes* (núm. 17)—, al contrario debe ver y alcanzar estrechamente, conceptualmente y de hecho, la libertad como consecuencia de la «dignidad» proveniente del hecho de ser él mismo signo altísimo de la imagen de Dios. Esta es la dignidad que exige que el hombre actúe según opciones conscientes y libres, esto es, movido e inducido por convicciones personales y no por un ciego impulso interno o por mera coacción externa (cfr. *Gaudium et spes*, l.c.). También una sugestión psicológica, aparentemente «pacífica», de la cual el hombre es hecho objeto con medios de persuasión hábilmente manipulados, puede representar y ser un ataque y un peligro para la libertad. Por este motivo deseo hablar de las comunicaciones sociales *al servicio* de la libertad responsable del hombre.

El hombre es creado libre y como tal debe crecer y formarse con un esfuerzo de superación de sí mismo, ayudado por la gracia sobrenatural. La libertad es conquista. El hombre debe liberarse de todo aquello que puede desviarlo de esta conquista.

3. En este punto los *mass-media* se sitúan como factores dotados de una particular «carga positiva» en el contexto de este «esfuerzo» para la realización de la libertad responsable: es una constatación que ha permanecido constantemente presente en la atención de la Iglesia. Esta posibilidad, si es necesario, se puede también demostrar. Pero aquí hay que preguntarse antes que nada: ¿De la pura posibilidad a su realización, hay verdaderamente un «paso positivo»? ¿responden de hecho los *mass-media* a las expectativas suscitadas en cuanto factores que favorecen la realización del hombre en su «libertad responsable»?

¿Cómo se expresan estos medios o cómo son utilizados para la realización del hombre en su libertad y cómo la promueven? De hecho se presentan como realidad de la «fuerza expresiva» y a menudo, bajo ciertos aspectos, como imposición, sin que el hombre de hoy esté en condiciones de crear el vacío en torno a sí, ni de atrincherarse en el aislamiento, porque esto equivaldría a privarse de contactos de los cuales no puede prescindir.

A menudo los *mass-media* son expresión de un poder que se hace «opresión», especialmente allí donde no se admite el pluralismo. Esto puede tener lugar no solamente donde la libertad es de hecho inexistente, en razón de dictaduras de cualquier signo, sino también donde, aún conservándose de alguna manera esta libertad, se registran continuamente enormes intereses y presiones manifiestas u ocultas.

Esto se refiere particularmente a la violación de los derechos de libertad religiosa, pero vale también para otras situaciones opresivas que, prácticamente, se basan por varios motivos en la instrumentalización del hombre.

La libertad responsable de los operadores de las comunicaciones sociales, que debe presidir determinadas opciones, ¡no puede dejar de tener en cuenta a aquellos a quienes afectan dichas opciones, también ellos libres y responsables!

Llamar a los operadores de los *mass-media* al compromiso que impone el amor, la justicia, la verdad, junto con la libertad, es un deber de mi servicio pastoral. ¡La verdad no debe ser nunca manipulada, ni dejada de lado la justicia, ni olvidado el amor, si se quiere corresponder a aquellas normas deontológicas que, olvidadas o inatendidas, producen sectarismo, escándalos, sumisión a los poderosos o condescendencia a la razón de Estado! No será la Iglesia la que sugiera atenuar u ocultar la verdad, aunque sea dura: la Iglesia, precisamente porque es «experta en humanidad», no se deja llevar por un ingenuo optimismo, sino que predica la esperanza y no se complace en los escándalos. Pero, precisamente porque respeta la verdad, ¡no puede por menos de poner de relieve que

ciertos modos de utilizar los *mass-media* son capciosos en relación con la verdad y deletéreos en relación con la esperanza!

4. Todavía más: se nota en los *mass-media* una carga agresiva en la información y en las imágenes: desde el espectáculo a los mensajes políticos, desde los descubrimientos culturales prefabricados y dirigidos —que son auténtico adoctrinamiento—, a los mismos mensajes publicitarios.

Es difícil en nuestro mundo pensar en operadores de los *mass-media* que estén desvinculados de sus propias matrices culturales; pero ello no debe hacer que se imponga a otros la ideología personal. El operador deberá llevar a cabo un servicio lo más objetivo posible y no transformarse en un persuasor oculto por interés de parte, conformismo o ganancia.

Hay además un peligro para la libertad responsable de los usuarios de los medios de comunicación social, que hay que señalar como un grave atentado y está constituido por las solicitudes a la sexualidad, llegando incluso a la irrupción de la pornografía: en las palabras pronunciadas o escritas, en las imágenes, en las representaciones e incluso en ciertas manifestaciones llamadas «artísticas». Se lleva a la práctica a veces un auténtico lenocinio, que cumple con una obra de destrucción y perversión. Denunciar este estado de cosas no es manifestar, como a menudo se oye decir, mentalidad atrasada o voluntad de censura: la denuncia, también en este punto, se hace precisamente en nombre de la libertad, que postula y exige no tener que sufrir imposiciones por parte de quien quiera transformar la sexualidad misma en un «fin». Esta operación sería no sólo anticristiana, sino antihumana, con los consiguientes pasos a la droga, a la perversión, a la degeneración.

La capacidad intrínseca de los medios de comunicación social ofrece posibilidades enormes, se ha dicho. Entre ellas también la de exaltar la violencia, a través de la descripción y figuración de la existente en la crónica cotidiana, con «complacencias» de palabras y de imágenes, ¡tal vez con el pretexto de condenarla! Se da demasiado a menudo una especie de búsqueda que tiende a suscitar emociones violentas para estimular la atención, cada vez más débil.

5. No se puede dejar de hablar del efecto y de la influencia que todo esto ejerce de manera particular en la fantasía de los más jóvenes y de los niños, grandes usuarios de los *mas-media*, desprovistos y abiertos a los mensajes y a las sensaciones.

Hay una maduración que debe ser ayudada sin traumatizar artificiosamente un sujeto todavía en formación.

La Iglesia, en éste como en otros campos, pide responsabilidad, no sólo a los operadores de los medios de comunicación social, sino a todos y, de manera especial, a las familias.

El modo de vivir, especialmente en las naciones más industrializadas, lleva muy a menudo a que las familias se descarguen de sus responsabilidades educativas, encontrando en la facilidad de evasión (en casa repre-

sentada especialmente por la televisión y ciertas publicaciones) el modo de tener ocupados tiempo y actividad de niños y muchachos. Nadie puede negar que en ello hay una cierta justificación, dado que demasiado a menudo faltan estructuras e infraestructuras suficientes para potenciar y valorizar el tiempo libre de los chicos y orientar sus energías.

Sufren las consecuencias precisamente aquellos que más necesidad tienen de ser ayudados en el desarrollo de su libertad responsable. Y he aquí que emerge el deber —especialmente para los creyentes, para las mujeres y los hombres amantes de la libertad— de proteger especialmente a los niños y muchachos de las agresiones que sufren también por parte de los *mass-media*. ¡Que nadie falte a su deber aduciendo motivos demasiado cómodos para desentenderse!

6. ¡Hay que preguntarse, especialmente en las circunstancias de esta Jornada, si la misma acción pastoral lleva a buen fin todo aquello que se le pide en el sector de los *mass-media*!

Al respecto hay que recordar, además del documento *Communio et progressio*, cuyo décimo aniversario celebramos, lo dicho en el Sínodo de los Obispos de 1977 —ratificado por la Constitución Apostólica *Catechesi tradendae*—, así como lo que ha puesto de relieve el Sínodo de los Obispos de octubre de 1980, sobre problemas de la familia.

La teología y la práctica pastoral, la organización de la catequesis, la escuela —especialmente la escuela católica—, las asociaciones y los grupos católicos, ¿qué han hecho, concretamente, por este específico punto crucial?

Hay que intensificar la acción directa para la formación de una conciencia crítica que influya en las actitudes y en los comportamientos no sólo de los católicos o de los hermanos cristianos —defensores por convicción o por misión de la libertad y de la dignidad de la persona humana—, sino de todos los hombres y mujeres, adultos y jóvenes, a fin de que sepan verdaderamente «ver, juzgar y actuar» como personas libres y responsables, también —quisiera decir sobre todo— en la producción y en las decisiones que se refieren a los medios de comunicación social.

El servicio pastoral, del que soy responsable; la mentalidad conciliar, de la que tantas veces he tenido modo de hablar y que siempre he estimulado; mis experiencias personales y convicciones de hombre, de cristiano y de obispo me llevan a subrayar la posibilidad de hacer el bien, la riqueza, el carácter providencial de los *mass-media*. Puedo añadir que no me pasa inadvertido, antes bien, me «interesa mucho» ese aspecto suyo que se suele llamar artístico. Pero todo ello no impide que se vea también la parte que en el uso —o abuso— de los *mass-media* tiene la ganancia, la industria, la razón del poder.

Todos estos aspectos han de ser considerados de cara a una valoración global de estos medios. ¡Que los *mass-media* sean, cada vez menos, instrumentos de manipulación del hombre! Y sean en cambio, cada vez más, promotores de libertad: medios de potenciamiento, de crecimiento, de maduración de la verdadera libertad del hombre.

Con estos deseos, me siento feliz de invocar sobre todos aquellos que lean estas palabras y traten de captar y actuar su sentido pastoral, los más abundantes favores celestiales, de los cuales es prenda mi Bendición Apostólica.

Vaticano, 10 de mayo, IV domingo de Pascua de 1981, III año de mi pontificado.

MENSAJE DE JUAN PABLO II, DEL 15-V-1981, LEIDO POR EL CARDENAL CASAROLI, A LOS TRABAJADORES EN EL 90 ANIVERSARIO DE LA ENCICLICA «RERUM NOVARUM» DE LEON XIII

[...]

En nuestros días la cuestión social ha adquirido una dimensión compleja y universal que tiene necesidad siempre de una norma ética. Así, no es posible buscar la justicia sólo a mero nivel económico, cuando se la conculca después en el plano de las libertades individuales o asociativas o de las necesidades espirituales de cada uno. Si se quiere promover al hombre, hay que hacerlo de manera integral, sin perder nunca de vista la plenitud de su dignidad y toda su verdad histórica [...].

A pesar de esto, no se puede sostener ciertamente que en el mundo se haya establecido una justicia social. Sólo quisiera subrayar brevemente hoy algunos errores, algunas deficiencias y algunas necesidades que se registran todavía en el mundo del trabajo.

Aún hay regiones en la tierra donde lo superfluo y el lujo viven al lado de una pobreza humillante, de una pobreza que a veces pone en peligro incluso la supervivencia. Semejante contrasentido se encuentra, quizá menos visible pero igualmente escandaloso, también en el campo internacional: un limitado número de naciones ha acumulado las riquezas y, en otros lugares, poblaciones enteras luchan por el mínimo necesario para la supervivencia. La injusticia individual, mediante una explotación concreta del hombre, es palpable; falta una protección suficiente para las futuras madres; las condiciones de trabajo y de vida hieren el principio de igualdad y cambian según el sexo o la convicción política y religiosa de los trabajadores. Aparentemente ya nos hemos habituado a condiciones de vida indignas del hombre en la periferia de las grandes ciudades, a la manipulación y a la marginación de enteros grupos étnicos.

La asociación sindical representa uno de los derechos del hombre. A pesar de esto, frecuentemente en política, se abusa de este derecho; el poder de representación de los trabajadores por medio de los sindicatos, deja que desear en muchos casos. No se tiene en cuenta seriamente aquí y allá la protección en el puesto de trabajo y, por lo tanto, ocurren accidentes y las tragedias humanas siguen su curso. La desocupación tiende a aumentar, en vez de disminuir, y provoca, precisamente entre los

jóvenes, reflejos psicológicos y de carácter irresponsable. El problema de la automatización hace temer por su puesto de trabajo a los obreros de enteras ramas industriales; los obreros especializados y los no especializados están frecuentemente a merced de una gran inseguridad económica. Trabajadores extranjeros, obligados por la necesidad, deben romper los lazos con la familia, con las tradiciones y con la patria; en muchos casos se registra también un proceso de falta de compenetración con el relativo cónyuge; tienen que renunciar a una instrucción adecuada para sus hijos y a un futuro mejor. Frecuentemente son aceptados según la necesidad, echados de una a otra parte y, finalmente, despedidos [...].

DOCUMENTO DE LA SANTA SEDE, DEL 4-III-1981, SOBRE EL AÑO INTERNACIONAL DE LOS MINUSVALIDOS

A todos los que se dedican al cuidado de las personas minusválidas.

Desde el primer momento, la Santa Sede ha acogido favorablemente la *iniciativa* de las Naciones Unidas de proclamar 1981 «Año Internacional de los Minusválidos». En efecto, si, dado su número —se calcula que sobrepasan los 400 millones—, y sobre todo dada su particular condición humana y social, tales personas merecen que la comunidad mundial se ocupe de ellas activamente, no puede faltar en tan noble empresa la solicitud diligente y vigilante de la Iglesia la cual, por su naturaleza, vocación y misión, siente de manera especial la suerte de los hermanos más débiles y probados.

Por esto, ha seguido con suma atención cuanto se ha ido llevando a efecto hasta ahora en favor de los minusválidos en el plano legislativo, tanto nacional como internacional: a este respecto hay que destacar la Declaración de los Derechos de los Minusválidos por parte de la ONU y la Declaración sobre los derechos de las personas retrasadas mentalmente, así como los resultados positivos y las perspectivas de la investigación científica y social, las propuestas innovadoras y las obras de diverso tipo que se están desarrollando en ese sector. Tales iniciativas ponen de manifiesto una renovada toma de conciencia del deber de solidaridad en este campo específico del sufrimiento humano, teniendo en cuenta además que en los países del Tercer Mundo la suerte de las personas minusválidas es aún más grave y exige más atención y más solícita consideración.

La Iglesia se asocia plenamente a las iniciativas y a los laudables esfuerzos puestos en práctica para mejorar la situación de las personas minusválidas y tiene intención de aportar a ellos su propia contribución. Lo hace ante todo por fidelidad al ejemplo y a las enseñanzas de su Fundador. Jesucristo, en efecto, ha reservado un cuidado especial y prioritario a los que sufren, en toda la amplia gama del dolor humano,

rodeándolos con su amor misericordioso durante su ministerio y manifestando en ello el poder salvífico de la redención que abarca al hombre en su singularidad y vitalidad. Los marginados, los desvalidos, los pobres, los que sufren, los enfermos, han sido los destinatarios privilegiados del anuncio, de palabra y de obra, de la Buena Noticia del Reino de Dios que hace irrupción en la historia de la humanidad.

La comunidad de los discípulos de Cristo, siguiendo su ejemplo, ha hecho florecer, a través de los siglos, obras de generosidad extraordinaria, que testimonian no sólo la fe y la esperanza en Dios, sino también una fe y un amor inquebrantables a la dignidad del hombre, al valor irrepetible de toda vida humana y al destino trascendente de quien ha sido llamado a la existencia.

En la visión de fe y en la concepción del hombre que les es propia, los cristianos saben que también en el ser minusválido reluce misteriosamente la imagen y la semejanza que Dios mismo ha querido imprimir en la vida de sus hijos; y recordando que el mismo Cristo ha querido identificarse místicamente con el prójimo que sufre, considerando como hecho a sí mismo todo lo que se hiciese en favor de los más pequeños entre sus hermanos (cfr. Mt. 25, 31-46), se sienten solicitados a servir en El a aquellos a quienes las pruebas físicas han azotado y menoscabado, y no piensan dejar de hacer nada de lo que deba llevarse a cabo, aunque sea con sacrificio personal, para aliviar sus condiciones de inferioridad.

¿Cómo no pensar en estos momentos, con vivo reconocimiento, en todas las comunidades y asociaciones, en todos los religiosos y religiosas, en todos los voluntarios seculares que se prodigan en el servicio a las personas minusválidas, atestiguando así la vitalidad perenne de ese amor que no conoce barreras?

Con este espíritu, la Santa Sede, a la vez que expresa a los responsables del bien común, a las Organizaciones internacionales y a todos los que se dedican al servicio de los minusválidos su propia complacencia y su aliento por las iniciativas emprendidas, considera útil recordar brevemente algunos principios que puedan servir de guía para acercarse a tales personas y considera también útil sugerir algunas líneas de actuación.

I. Principios fundamentales

1. El primer principio que debe ser afirmado con claridad y con vigor es que la persona minusválida (bien lo sea por enfermedad congénita, a consecuencia de enfermedades crónicas o de infortunio, o bien por debilidad mental o enfermedades sensoriales, cualquiera que sea el alcance de tales lesiones), *es un sujeto plenamente humano, con los correspondientes derechos innatos, sacros e inviolables*. Tal afirmación se apoya en el firme reconocimiento de que el ser humano posee una dignidad propia y un valor autónomo propio desde su concepción y en todos los estadios de su desarrollo, sean cuales sean sus condiciones físicas. Este principio que brota de la recta conciencia universal, debe ser

asumido como el fundamento inquebrantable de la legislación y de la vida social.

Es más, pensándolo bien se podía decir que la persona del minusválido, con las limitaciones y el sufrimiento que lleva impresos en su cuerpo y en sus facultades, pone más de relieve el misterio del ser humano, con toda su dignidad y grandeza. Ante la persona minusválida, nos sentimos introducidos en las fronteras secretas de la existencia humana; y se nos llama a acercarnos con respeto y amor a este misterio.

2. Dado que la persona que sufre una «minoración» es un sujeto con todos sus derechos, *se le debe facilitar la participación en la vida de la sociedad en todas las dimensiones y a todos los niveles accesibles a sus posibilidades*. El reconocimiento de estos derechos y el deber de la solidaridad humana constituyen un empeño y una tarea a realizar, con la creación de condiciones y estructuras psicológicas, sociales, familiares, educativas y legislativas idóneas a acoger y desarrollar integralmente la persona minusválida.

La Declaración sobre los Derechos de las Personas Minusválidas proclama, en efecto, en el núm. 3, que «las personas minusválidas tienen derecho a ser respetadas por su dignidad humana. Las personas minusválidas, cualquiera que sea el origen, la naturaleza y la gravedad de su «minoración» y de sus incapacidades, tienen los mismos derechos fundamentales que los demás ciudadanos de su edad, lo cual comporta ante todo y sobre todo el derecho a llevar una vida decente, lo más normal y completa posible».

3. La calidad de una sociedad y de una civilización se mide por el respeto que manifiesta hacia los más débiles de sus miembros. Una sociedad tecnocráticamente perfecta, en la que se admita sólo a miembros plenamente funcionales y donde uno que no se ajuste a este modelo o no sea apto para desempeñar un papel propio sea marginado, recluso o, lo que es peor, eliminado, debería ser considerada como radicalmente indigna del hombre, aunque fuese ventajosa desde el punto de vista económico. En efecto, sería una sociedad pervertida por una especie de discriminación no menos condenable que la racial, es decir, *la discriminación de los fuertes y «sanos» contra los débiles y enfermos*. Es necesario afirmar con toda claridad que la persona minorada es uno de nosotros, partícipe de nuestra misma humanidad. Reconociendo y promoviendo su dignidad y sus derechos reconocemos y promovemos nuestra misma dignidad y nuestros mismos derechos.

4. La orientación fundamental a la hora de plantear los problemas que conciernen a la participación de las personas minoradas en la vida social, debe ser inspirada por los *principios de integración, normalización y personalización*.

El principio de la *integración* se opone a la tendencia al aislamiento, a la segregación y a la marginación de la persona minorada; pero va también más allá de una actitud de mera tolerancia respecto a ella. Com-

porta el empeño a convertir la persona minusválida en un sujeto a título pleno, según sus posibilidades, en el ámbito de la vida familiar lo mismo que en el de la escuela, del trabajo y, en general, en la comunidad social, política religiosa.

De este principio deriva como consecuencia natural, el de la *normalización*, que significa y conlleva el esfuerzo orientado a la rehabilitación completa de las personas minusválidas con todos los medios y técnicas de que se dispone hoy día y, donde esto no sea posible, a la consecución de un marco de vida y de actividad que se acerque lo más posible al normal.

Por último, el principio de la *personalización* pone en claro que, en los cuidados de diverso tipo, así como en las diversas relaciones de orden educativo y social orientadas a eliminar las «minoraciones», se debe siempre considerar, proteger y promover principalmente la dignidad, el bienestar y el desarrollo integral de la persona minorada, en todas sus dimensiones y facultades físicas, morales y espirituales. Tal principio significa y comporta además la superación de ciertos ambientes caracterizados por el colectivismo y por el anonimato, a los cuales la persona minorada queda a veces relegada.

II. Líneas de actuación

1. No se puede por menos de desear que a tales enunciados —al igual que a los de la citada Declaración— se le dé pleno reconocimiento en la comunidad internacional y nacional, evitando interpretaciones reductivas, excepciones arbitrarias, si no incluso aplicaciones contrarias a la ética, que terminan por hacer inútil su sentido y su alcance.

Los adelantos de la ciencia y de la medicina han permitido, en nuestros días, descubrir en el feto algunos defectos que puedan dar origen a futuras malformaciones y deficiencias. La imposibilidad que encuentra de momento la medicina para darles remedio ha llevado a algunos a proponer e incluso a practicar la supresión del feto. Este comportamiento nace de una actitud de pseudo-humanismo, que compromete el orden ético de los valores objetivos y no puede por menos de ser rechazado por las conciencias rectas. Eso mismo manifiesta un modo de obrar que, si fuese aplicado en otra edad, sería considerado gravemente antihumano. Por otra parte, la negligencia deliberada de asistencia o cualquier acción que conduzca a la supresión del recién nacido minorado, representan atentados no sólo a la ética médica, sino también al derecho fundamental e inalienable a la vida. No se puede disponer a propio gusto de la vida humana, arrogándole un poder arbitrario sobre ella. La medicina pierde su título de nobleza cuando, en vez de atacar la enfermedad, ataca la vida; en efecto, la prevención debe ser contra la enfermedad, no contra la vida. Y no se podrá decir nunca que se quiere dar alivio a una familia, suprimiendo a uno de sus miembros. El respeto, la dedicación, el tiempo y los medios exigidos por el cuidado de las personas minusválidas.

das, incluidas las que están gravemente afectadas en sus facultades mentales, es el precio que una sociedad debe pagar con generosidad para seguir siendo realmente humana.

2. De la afirmación clara de este punto deriva como consecuencia el deber de emprender investigaciones más amplias y profundas para vencer las causas de las «minoraciones». Ciertamente se ha hecho ya mucho en este campo durante los últimos años, pero queda por hacer aún mucho más. Corresponde a los hombres de ciencia el nobilísimo cometido de poner su competencia y sus estudios al servicio del mejoramiento de la calidad y de la defensa de la vida humana. Las tendencias actuales en el campo de la genética, de la fetología, de la perinatología, de la bioquímica y de la neurología, para mencionar solamente algunas disciplinas, permiten nutrir la esperanza de sensibles progresos. Un esfuerzo unificado de las investigaciones no dejará de conducir, como es deseable, a resultados alentadores en un futuro no lejano.

Estas iniciativas de investigación fundamental y de aplicación de los conocimientos adquiridos merecen por tanto un impulso más decidido y un apoyo más concreto. La Santa Sede abraza el deseo de que las Instituciones internacionales, los Poderes públicos de cada nación, los Organismos de investigación, las Organizaciones no gubernativas y Fundaciones privadas quieran estimular cada vez más la investigación y destinar a ella los fondos necesarios.

3. La acción prioritaria de prevención de las «minoraciones», debe hacer reflexionar también sobre el fenómeno preocupante de personas que, en número elevado, sufren un «agotamiento» o «choc» que perturban su vida síquica e interior. Prevenir estas «minoraciones» y promover la salud del espíritu, significa y comporta un esfuerzo concorde y creativo para favorecer una educación integral, un ambiente, relaciones humanas e instrumentos de comunicación en los que la persona no se vea mutilada en sus más profundas exigencias y aspiraciones —en primer lugar las morales y espirituales— y no sufra violencias que terminen por comprometer su equilibrio y su dinamismo interior. Se impone una ecología espiritual a la par que una ecología natural.

4. Cuando la «minoración», no obstante la aplicación responsable y rigurosa de todas las técnicas y de todos los cuidados de que hoy se dispone, se presenta como irremediable e irreversible; se deberán buscar y actuar todas las demás posibilidades de crecimiento humano y de integración social que permanecen abiertas para quien la sufre. Además del derecho a los cuidados médicos apropiados, la Declaración de las Naciones Unidas enumera otros derechos que tienen como objetivo la integración o la reintegración más completa posible en la sociedad. Tales derechos tienen una repercusión muy amplia sobre un conjunto de servicios ya existentes o aún por organizar, entre los que se puede mencionar la organización de un adecuado sistema educativo, la formación pro-

fesional responsable, los servicios de asesoramiento, un apropiado puesto de trabajo.

5. Hay un punto que parece digno de especial atención. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Minusválidas afirma, que «las personas "minoradas" tienen el derecho de vivir con sus familias o en un ambiente familiar» (núm. 9). La realización efectiva de este derecho resulta sumamente importante. En efecto, es en el hogar doméstico, rodeada del afecto familiar, donde la persona minusválida encuentra el ambiente más natural y apropiado a su desarrollo. Teniendo en cuenta esta configuración primordial de la familia en orden al desarrollo y a la integración de la persona minorada en la sociedad, los responsables de las estructuras médico-sociales y orto-pedagógicas deberían proyectar la propia estrategia a partir de la familia y haciendo de ésta la principal fuerza dinámica del proceso de curación y de integración social.

6. En esta perspectiva, habrá que tener presente la decisiva importancia que reviste la ayuda a ofrecer en el momento en que los padres descubren con dolor que un hijo suyo es minusválido. El trauma que esto les produce puede ser tan profundo y causar una crisis tan fuerte que sacuda todo un sistema de valores. La falta de una asistencia precoz y de un apoyo adecuado en esta fase puede tener consecuencias nefastas tanto para los padres como para la persona minusválida. No deberán pues contentarse únicamente con el examen diagnóstico, dejando después a los padres abandonados a sí mismos. El aislamiento y el rechazo de la sociedad podrían inducirlos a no aceptar o, lo que Dios no quiera, a rechazar la prole minusválida. Es necesario por tanto que las familias se sientan rodeadas por una profunda comprensión y simpatía de parte de la comunidad y que reciban de las Asociaciones y de los Poderes públicos una asistencia adecuada desde el momento en que se descubre la «minoración» en uno de sus miembros.

La Santa Sede, consciente de la heroica fuerza de ánimo exigida a esas familias, no puede menos de dar una contribución de aprecio y expresar su profundo reconocimiento a las familias que generosa y valientemente, han aceptado tomar a su cargo e incluso adoptar niños minusválidos. El testimonio que ellas dan en favor de la dignidad, el valor y la sacralidad de la persona humana merece ser abiertamente reconocido y apoyado por toda la comunidad humana.

7. Cuando circunstancias particulares o exigencias especiales que tienen como finalidad la rehabilitación de la persona minusválida exigen su estancia temporánea o también permanente fuera del hogar doméstico, las casas-asilos y las instituciones que suplen a la familia, en lo que se refiere a su configuración y a su funcionamiento, deberían acercarse, en cuanto sea posible, al modelo familiar, evitando la segregación y el anonimato. Será pues necesario obrar de manera que durante la permanencia en estos centros las relaciones de las personas minusválidas con

la familia y con los amigos se cultiven con frecuencia y espontaneidad. El cariño, la dedicación, además de la competencia profesional, de padres, familiares y educadores, según múltiples testimonios, han conseguido resultados de insospechada eficacia para el desarrollo humano y profesional de las personas minusválidas. La experiencia ha demostrado —y esto parece ser un punto importante de reflexión— que en un ambiente humano y familiar favorable, lleno de respeto profundo y de sincero afecto, las personas minusválidas pueden desarrollar de manera sorprendente las propias cualidades humanas, morales y espirituales, convirtiéndose incluso en donadores de paz y hasta de alegría.

8. La vida afectiva de las personas minusválidas deberá recibir especial atención. Sobre todo cuando, debido a su «minorización», se ven imposibilitadas para contraer matrimonio, es importante que no sólo estén convenientemente protegidas contra la promiscuidad y los abusos, sino también que puedan encontrar una comunidad llena de calor humano, donde su necesidad de amistad y de afecto sea respetada y satisfecha en conformidad con su inalienable dignidad moral.

9. El niño y el joven minusválido tienen evidentemente el derecho a la instrucción. Esta les será asegurada, en cuanto lo posible, por medio de una escolaridad normal, o también a través de escuelas especializadas según la naturaleza de las «minoraciones». Allí donde sea necesaria una escolarización a domicilio, es deseable que las autoridades competentes faciliten los medios necesarios a las familias. Asimismo se deberá posibilitar y facilitar el acceso a la enseñanza superior y una oportuna asistencia post-escolar.

10. Un momento particularmente delicado en la vida de la persona minusválida es el paso de la escuela a su inserción en la sociedad o en la vida profesional. En esta fase tiene necesidad de especial comprensión y de aliento por parte de los distintos Organismos de la comunidad. Incumbiere a los Poderes públicos garantizar y promover con medidas eficaces el derecho de las personas minusválidas a la preparación profesional para la que sean idóneas. Deberá prestarse una gran atención a las condiciones de trabajo, como la asignación de los puestos en función de las «minoraciones», salarios justos y posibilidad de promoción. Es muy recomendable que los empresarios sean informados previamente sobre el empleo, las condiciones y la psicología de las personas minusválidas. En efecto, éstas se encuentran con múltiples obstáculos en el sector profesional, como por ejemplo, el sentimiento de inferioridad por lo que se refiere al propio aspecto o al eventual rendimiento, la preocupación por incurrir en accidentes de trabajo, etc.

11. Evidentemente, la persona minusválida tiene todos los derechos civiles y políticos que competen a los demás ciudadanos y, en línea de máxima, debe ser habilitada para ejercerlos. No obstante, ciertas formas de «minoración» —piénsese en la categoría numéricamente importante

de los minusválidos mentales— pueden constituir un obstáculo para el ejercicio responsable de tales derechos. También en estos casos se deberá actuar no de forma arbitraria ni aplicando medidas represivas, sino en base a rigurosos y objetivos criterios ético-jurídicos.

12. Al minusválido, por lo demás, se le instará a que no se reduzca a ser solamente un sujeto de derechos, habituado a gozar de los cuidados y de la solidaridad de los demás, en actitud de mera pasividad. No es solamente uno al que se le da; debe ser ayudado para que se convierta en uno que da a su vez y en la medida de todas sus propias posibilidades. Un momento importante y decisivo en su formación habrá sido logrado cuando haya adquirido conciencia de su dignidad y de sus valores, y se haya dado cuenta de que se espera algo de él, y que también él puede y debe contribuir al progreso y al bien de su familia y de la comunidad. Debe tener de sí mismo una idea realística, es cierto; pero no menos positiva; haciéndose reconocer como persona en condiciones de asumir responsabilidades, capaz de decidir y de colaborar.

13. Numerosas personas, asociaciones e instituciones se dedican hoy por profesión, con frecuencia por auténtica vocación humana y religiosa, a la asistencia de los minusválidos. En no pocos casos estos últimos han manifestado que prefieren personal y educadores «voluntarios», porque ven en ellos un sentimiento particular de gratitud y de solidaridad. Esta observación demuestra que la competencia técnica y profesional, aunque es sin duda necesaria y, más aún, se debe cultivar y enriquecer por todos los medios, sin embargo, por sí sola no es suficiente. Es necesario unir a la alta competencia una rica sensibilidad humana. Quienes se dedican laudablemente al servicio de las personas minusválidas deben conocer de manera científica las «minoraciones», pero al mismo tiempo deben comprender con el corazón a la persona portadora de tales «minoraciones». Deben aprender a ser sensibles a los signos propios de expresión y de comunicación de las personas minusválidas; deben conquistar el arte de hacer el gesto exacto y de decir la palabra conveniente; deben saber ver con serenidad eventuales reacciones y formas emotivas y aprender a dialogar con los padres y familiares de las personas minusválidas. Esta competencia no será plenamente humana si no está sostenida interiormente por disposiciones morales y espirituales apropiadas, hechas de atención, sensibilidad, respeto especial por todo aquello que en el ser humano es fuente de debilidad y de dependencia. El cuidado y la asistencia a las personas minusválidas se convierte entonces en escuela incluso para los padres, educadores y personal de servicio: una escuela exigente, noble y elevadora de auténtica humanidad.

14. Es muy importante e incluso necesario que los servicios profesionales reciban por parte de los poderes públicos un apoyo moral y material con vistas a una organización eficaz de las intervenciones especializadas. Muchas naciones tienen ya, o están elaborando, una legislación ejemplar que define y protege el estatuto legal de la persona minus-

válida. Donde aún no existe, es incumbencia de los Gobiernos proveer a la garantía efectiva y a la promoción de los derechos de las personas minusválidas. A este respecto, sería una ventaja que las familias y las organizaciones voluntarias fuesen asociadas a la elaboración de las normas jurídicas y sociales en esta materia.

15. Incluso la mejor de las legislaciones corre no obstante el riesgo de no incidir en el contexto social y de no producir todos sus frutos, si no es aceptada por la conciencia personal de los ciudadanos y por la conciencia colectiva de la comunidad.

Los minusválidos, sus familias y sus familiares constituyen una parte de la gran familia humana. Por muy grande que, desgraciadamente, pueda ser su número, ellos forman un grupo minoritario dentro de la comunidad. Precisamente, por este único hecho, existe el peligro de que no gocen suficientemente del interés general. Se añade a esto la reacción, a menudo espontánea, de una comunidad que rechaza y reprime psicológicamente lo que no encaja en las costumbres. El hombre no desea ser confrontado con formas de existencia que reflejan visiblemente los aspectos negativos de la vida. Así se crea el fenómeno de la marginación como una forma de mecanismo de defensa y de rechazo. Sin embargo, desde el momento que el hombre y la sociedad son verdaderamente humanos cuando entran en un proceso consciente y querido de aceptación, incluso de la debilidad, de solidaridad y de participación también en los sufrimientos del prójimo, se debe reaccionar con una educación a dicha tendencia.

La celebración del «Año Internacional del Minusválido» ofrece por consiguiente una oportunidad propicia para una reflexión más exacta y global de la situación, de los problemas y de las exigencias de millones de personas que componen la familia humana, particularmente del Tercer Mundo. Es importante que no se deje pasar en vano esta ocasión. Con el aporte de las ciencias y con la cooperación de todas las instancias de la sociedad, ella debe conducir a una mejor comprensión del minusválido, de su dignidad y de sus derechos y, sobre todo, ellas deben favorecer la afirmación de un amor sincero y efectivo para todo hombre en su unicidad y concreción.

16. Los cristianos tienen una misión insustituible en este campo. Recordando las responsabilidades que les atañen como testimonios de Cristo, ellos deben hacer suyos los sentimientos del Salvador hacia los que sufren, y estimular en el mundo la actitud y el ejemplo de la caridad, para que el interés por los hermanos menos dotados no decaiga jamás. El Concilio Vaticano II ha individuado en esta presencia caritativa el núcleo esencial del apostolado de los seglares, recordando que Cristo ha hecho suyo el precepto de la caridad hacia el prójimo «y lo enriqueció con un nuevo sentido al querer identificarse El mismo con los hermanos como objeto único de la caridad... Cristo, pues, al asumir la naturaleza humana, unió a Sí con cierta solidaridad sobrenatural a todo el género

humano como una sola familia y estableció la caridad como distintivo de sus discípulos con estas palabras «*En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos con otros*» (Jn. 13, 35). En sus comienzos, la Santa Iglesia, uniendo el «ágape» a la Cena Eucarística, se manifestaba toda entera unida en torno a Cristo por el vínculo de la caridad; así en todo tiempo se hace reconocer por este distintivo del amor y, sin dejar de gozarse con las iniciativas de los demás, reivindica para sí las obras de caridad como deber y derecho propio que no puede enajenar. Por lo cual, la misericordia para con los necesitados y los enfermos y las llamadas obras de caridad y de ayuda mutua para aliviar todas las necesidades humanas son consideradas por la Iglesia con un singular honor» (*Apostolicam actuositatem*, 8).

En este «Año Internacional de los Minusválidos», los cristianos estén, por tanto, al lado de los hermanos y hermanas de todas las otras Organizaciones para promover, sostener, incrementar iniciativas dispuestas a aliviar la situación de los que sufren y a inserirlos armónicamente en el conjunto de la normal vida civil, dentro de lo posible; den su propia cooperación en hombres y medios, recordando especialmente aquellas beneméritas instituciones que, en el nombre y por la caridad de Cristo, con el ejemplo maravilloso de personas consagradas totalmente al Señor, se dedican con título especial a la educación, a la preparación profesional, a la asistencia post-escolar de los jóvenes minusválidos, o al cuidado generoso en los casos más dolorosos; las parroquias y las comunidades juveniles de distinto signo quieran dedicar particular atención a las familias donde nace y crece una de estas criaturas marcadas por el dolor y, al mismo tiempo, sepan estudiar, continúen aplicando y, si se da el caso, revisen métodos adecuados de catequesis para los minusválidos, y sigan la participación y la inserción de éstos en las actividades culturales y en las manifestaciones religiosas, de suerte que estas personas —que tienen un preciso título para una adecuada formación epiritual y moral— lleguen a ser miembros de pleno derecho de cada una de las comunidades cristianas.

17. El Santo Padre, que al principio del año, celebrando la Jornada mundial de la Paz, ha recordado públicamente en la Basílica Vaticana las iniciativas del «Año Internacional de los Minusválidos», pidiendo una particular solicitud para la solución de sus graves problemas, renueva su llamada para tomar con interés la suerte de estos hermanos. Vuelve a recordar cuanto dijo entonces: «Si sólo una parte del presupuesto para la carrera de armamentos fuese destinado a este objetivo, se podrían conseguir éxitos importantes y aliviar la suerte de numerosas personas que sufren» (1 de enero de 1981, núm. 5). Su Santidad alienta las diversas iniciativas, que se tomen a nivel internacional como aquellas que se emprendan en otras sedes, estimulando sobre todo a los hijos de la Iglesia católica para que den ejemplo de generosidad total. Y, al confiar a la materna protección de la Virgen Santísima, como hizo aquel día, a todos los queridos minusválidos del mundo, repite con viva esperanza

el deseo de que, «bajo la mirada materna de María, se multipliquen las experiencias de solidaridad humana y cristiana, en una fraternidad renovada que una a los débiles y a los fuertes en el camino común de la vocación divina de la persona humana» (*ib.*).

Vaticano, 4 de marzo de 1981.

DISCURSO DE JUAN PABLO II, DEL 19-III-1981, A LOS OBREROS, EN LA EXPLANADA DEL COMPLEJO SIDERURGICO DE TERNI

[...]

Por lo demás, el trabajo tiene su comienzo en Dios mismo. Si abrimos la Biblia, encontramos inmediatamente al principio del libro del Génesis la descripción de la creación del mundo. Pues bien, aún tratándose de una descripción figurativa e imaginaria, la obra de la creación se presenta según el esquema de una semana laborable: Dios-Elohim realiza su trabajo en el curso de seis días, para «descansar» después el día séptimo. De este modo, se suministra al hombre la indicación de unir el trabajo con el descanso. Efectivamente, entre el trabajo y el descanso hay un condicionamiento mutuo. Este principio que hoy ocupa uno de los puestos principales en los actuales códigos del trabajo, en la política y sobre todo en la ética del trabajo, está ya inscrito por la Sagrada Escritura en los comienzos mismos de la existencia del mundo.

El relato bíblico de la creación —una actividad que sólo Dios puede realizar y que se presenta a semejanza del trabajo humano— tiene una motivación profunda. No se trata sólo de un medio literario de expresión, sino que está impreso en toda *la lógica de la Palabra de Dios*. Efectivamente, en el mismo libro, leemos que el hombre, colocado en el mundo visible como coronamiento de la obra de la creación, ha sido creado a imagen de Dios: «Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó varón y mujer» (Gén. 1, 27). Por esto, en todo el mundo visible, *únicamente el hombre «trabaja»*. Sólo su actividad puede ser llamada «trabajo» en el pleno sentido de la palabra. En cambio, no es «trabajo» la actividad de los seres inferiores al hombre, los «animales», aún cuando a veces se llama así. El hecho es que para «trabajar» no bastan la potencialidad y las fuerzas físicas que también son propias de estos seres; y si el hombre quiere utilizar en su trabajo estas fuerzas específicas de los animales, debe «domesticarlos». Lo mismo se puede decir de las otras fuerzas ocultas en la naturaleza. El hombre debe «adaptarlas», en cierto sentido elevarlas al propio nivel. Mas para «trabajar» es necesario el hombre. *Para poder «trabajar»* es necesario ser «imagen y semejanza» de Dios (Gén. 1, 26).

Por esto, el trabajo no es en absoluto una ocupación servil, como juzgaba el mundo antiguo y menos antiguo, que lo reservaba a los esclavos, sino que es propio de los hombres libres, más aún, es una expresión de libertad creativa, en la que el hombre ofrece la medida de la propia capacidad de colaborar en la creación misma.

5. Ya esta breve reflexión nos habla de la *dignidad del trabajo*, más aún, de la dignidad específica del trabajo humano. Tiene su propio fundamento no en otra cosa, sino en la misma humanidad del que lo realiza. Esta verdad se halla en el centro mismo del «Evangelio del trabajo». Y la Iglesia la proclama desde que existe, a partir ya de la sencilla casa de Nazaret. La proclama cotidianamente. El 19 de marzo, por lo demás, ofrece una ocasión particular para hablar de ella y para vivirla juntamente con todos los trabajadores. De modo especial, es posible hacerlo precisamente este año. Efectivamente, este año se celebra el 90 aniversario de la Encíclica *Rerum novarum*, la primera Encíclica social de la Iglesia, publicada por mi predecesor el Papa León XIII en 1891. En el centro de su mensaje se encuentra la verdad sobre la dignidad del trabajo, una verdad que constituye el fundamento de toda la moral del trabajo. Sobre ella debe construirse todo código del trabajo, si quiere tener un carácter auténticamente «humanitario» y «social». Dicha Encíclica afirmó esta enseñanza, sin hacer suya ideología alguna de parte o teoría que, aún siendo de signo opuesto, se caracterice por el materialismo, esto es, por la reducción del hombre a una sola dimensión, la economicista, que lo prive del componente más alto de su dignidad de persona humana y de Hijo de Dios.

Pues bien, hoy como ayer, el Papa y toda la Iglesia tratan de estar al lado de los que creen en el hombre, porque creen en algo o en alguien que lo trasciende, de manera que puede afirmar y promover *todos* los valores de *todo* el hombre, sin sofocar ninguno.

Y ciertamente, no se hace honor a esta ética de base, cuando el trabajo se convierte en un medio de explotación del hombre, un pretexto para ganancias excesivas, una ocasión de injusticia a pequeña o grande escala. Como también se ha expresado el Concilio «es necesario adaptar todo el proceso de la producción a las exigencias de la persona y a sus formas de vida; sobre todo, a su vida familiar... Además debe asegurarse a los trabajadores la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ejercicio mismo del trabajo» (*Gaudium et spes*, 67). El trabajo debe ayudar al hombre a ser más hombre. Pero ninguno puede permitirse el lujo de soñar solamente, si luego no se esfuerza en traducir a la realidad concreta los más altos ideales. ¡Ay, si todas estas cosas se quedan sólo en palabras, o en solas buenas intenciones! Es necesario, en cambio, que la sociedad demuestre haber adquirido esta verdad, y lo demuestre concretamente, con la misma concreción que califica precisamente la actividad del trabajo de cada día [...].

PALABRAS DE JUAN PABLO II, DEL 5-IV-81, EN EL ANGELUS

[...] Todo hombre tiene derecho al don de la vida.

2. El tiempo de Cuaresma exige de nosotros *una profunda reflexión sobre los problemas de la vida y de la muerte*. Cuanto más profundamente entramos en este período, cuando más nos acercamos al *Triduum Sacrum*, tanto más intensamente debemos concentrarnos sobre este problema: sobre el problema de la vida y de la muerte, en todos sus aspectos y en todas sus consecuencias.

Efectivamente, existe en nuestra época una *amenaza creciente al valor de la vida*. Esta amenaza que, sobre todo, se hace notar en las sociedades del progreso técnico, de la civilización material y del bienestar, plantea un interrogante a la misma *autenticidad humana* de ese progreso.

En efecto, si sustituyéramos el derecho a la vida, el don de la vida, por el derecho de quitar la vida al hombre inocente, entonces no podríamos dudar que en medio de todos los valores técnicos y materiales, con los que computamos la dimensión del progreso y de la civilización, *quedaría quebrantado el valor esencial y fundamental* que es la razón justa y el metro de verdadero progreso: el valor de la vida humana, o sea, el valor de la existencia del hombre, dado que *vivere est viventibus esse*.

Quitar la vida humana significa siempre que el hombre ha perdido la confianza en el valor de su existencia; que ha destruido en sí, en su conocimiento, en su conciencia y voluntad, ese *valor primario y fundamental*.

Dios dice: «No matarás» (Ex. 20, 13). Y este mandamiento es al mismo tiempo el principio fundamental y la norma del código de la moralidad inscrito en la conciencia de cada hombre.

Si se concede derecho de ciudadanía al asesinato del hombre cuando todavía está en el seno de la madre, entonces, por esto mismo, se nos pone en el resbaladero de incalculables consecuencias de naturaleza moral. Si es lícito quitar la vida a un ser humano, cuando es el más débil, totalmente dependiente de la madre, de los padres, del ámbito de las conciencias humanas, entonces se asesina *no sólo a un hombre inocente, sino también a las conciencias mismas*. Y no se sabe lo amplia y velozmente que se propaga el radio de esa destrucción de las conciencias, sobre las que se basa, ante todo, el sentido más humano de la cultura y del progreso del hombre.

Los que piensan y afirman que éste es un problema privado y que, en tal caso, es necesario defender el derecho estrictamente personal a la decisión, no piensan y no dicen toda la verdad. El problema de la responsabilidad por la vida concebida en el seno de cada madre es problema eminentemente social. Y, al mismo tiempo, es problema de cada uno y de todos. Se halla en la base de la cultura moral de toda sociedad. Y de él depende el futuro de los hombres y de la sociedad. Si aceptásemos el derecho a quitar el don de la vida al hombre aún no nacido, ¿lograre-

mos defender después el derecho del hombre a la vida en todas las demás situaciones? ¿Lograremos detener el proceso de destrucción de las conciencias humanas? [...].

ENCICLICA «LABOREM EXERCENS» DE JUAN PABLO II, DE 14-IX-1981

[...]

El error de pensar según las categorías del economismo ha avanzado al mismo tiempo que surgía la filosofía materialista y se desarrollaba esta filosofía desde la fase más elemental y común (llamada también materialismo vulgar, porque pretende reducir la realidad espiritual a un fenómeno superfluo) hasta la fase del llamado materialismo dialéctico. Sin embargo parece que —en el marco de las presentes consideraciones—, para el problema fundamental del trabajo humano y, en particular, para la separación y contraposición entre «trabajo» y «capital», como entre dos factores de la producción considerados en aquella perspectiva «economística» dicha anteriormente, el *economismo haya tenido una importancia decisiva* y haya influido precisamente sobre tal planteamiento no humanístico de este problema antes del sistema filosófico materialista. No obstante es evidente que el materialismo, incluso en su forma dialéctica, no es capaz de ofrecer a la reflexión sobre el trabajo humano bases suficientes y definitivas, para que la primacía del hombre sobre el instrumento-capital, la primacía de la persona sobre las cosas, pueda encontrar en él una adecuada e irrefutable *verificación y apoyo*. También en el materialismo dialéctico el hombre no es ante todo sujeto del trabajo y causa eficiente del proceso de producción, sino que es entendido y tratado como dependiendo de lo que es material, como una especie de «resultante» de las relaciones económicas y de producción predominantes en una determinada época.

Evidentemente la antinomia entre trabajo y capital considerada aquí —la *antinomia* en cuyo marco *el trabajo ha sido separado del capital y contrapuesto al mismo*, en un cierto sentido ónticamente como si fuera un elemento cualquiera del proceso económico— inicia no sólo en la filosofía y en las teorías económicas del siglo XVIII, sino mucho más todavía en toda la praxis económico-social de aquel tiempo, que era el de la industrialización que nacía y se desarrollaba precipitadamente, en la cual se descubría en primer lugar la posibilidad de acrecentar mayormente las riquezas materiales, es decir los medios, pero se perdía de vista el fin, o sea el hombre, al cual estos medios deben servir. Precisamente este *error* práctico ha *perjudicado* ante todo al trabajo humano, *al hombre* del trabajo, y ha causado la reacción social éticamente justa, de la que se ha hablado anteriormente. El mismo error, que ya tiene su determinado aspecto histórico, relacionado con el período del primitivo capitalismo y liberalismo, puede sin embargo repetirse en otras circuns-

tancias de tiempo y lugar, si se parte, en el pensar, de las mismas premisas tanto teóricas como prácticas. No se ve otra posibilidad de una superación radical de este error, si no intervienen cambios adecuados tanto en el campo de la teoría, como en el de la práctica, cambios *que van en la línea de la decisiva convicción de la primacía de la persona sobre las cosas*, del trabajo del hombre sobre el capital como conjunto de los medios de producción.

14. Trabajo y propiedad

El proceso histórico —presentado aquí brevemente— que ciertamente ha salido de su fase inicial, pero que sigue en vigor, más aún que continúa extendiéndose a las relaciones entre las naciones y los continentes, exige una precisión también desde otro punto de vista. Es evidente que, cuando se habla de la antinomia entre trabajo y capital, no se trata sólo de conceptos abstractos o de «fuerzas anónimas», que actúan en la producción económica. Detrás de uno y otro concepto están los hombres, los hombres vivos, concretos; por una parte aquellos que realizan el trabajo sin ser propietarios de los medios de producción, y por otra aquellos que hacen de empresarios y son los propietarios de estos medios, o bien representan a los propietarios. Así pues, en el conjunto de este difícil proceso histórico, desde el principio *está el problema de la propiedad*. La Encíclica *Rerum novarum*, que tiene como tema la cuestión social, pone el acento también sobre este problema, recordando y confirmando la doctrina de la Iglesia sobre la propiedad, sobre el derecho a la propiedad privada, incluso cuando se trata de los medios de producción. Lo mismo ha hecho la Encíclica *Mater et magistra*.

El citado principio, tal y como se recordó entonces y como todavía es enseñado por la Iglesia, *se aparta* radicalmente del programa del *colectivismo*, proclamado por el marxismo y realizado en diversos Países del mundo en los decenios siguientes a la época de la Encíclica de León XIII. Tal principio se diferencia al mismo tiempo, del programa del *capitalismo*, practicado por el liberalismo y por los sistemas políticos, que se refieren a él. En este segundo caso, la diferencia consiste en el modo de entender el derecho mismo de propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación: *el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común*, al destino universal de los bienes.

Además, la propiedad según la enseñanza de la Iglesia nunca se ha entendido de modo que pueda constituir un motivo de contraste social en el trabajo. Como ya se ha recordado anteriormente en este mismo texto, la propiedad se adquiere ante todo mediante el trabajo, para que ella sirva al trabajo. Esto se refiere de modo especial a la propiedad de los medios de producción. El considerarlos aisladamente como un

conjunto de propiedades separadas con el fin de contraponerlos en la forma del «capital» al «trabajo», y más aún realizar la explotación del trabajo, es contrario a la naturaleza misma de estos medios y de su posesión. Estos no pueden ser *poseídos contra el trabajo*, no pueden ser ni siquiera *poseídos para poseer*, porque el único título legítimo para su posesión —y esto ya sea en la forma de la propiedad privada, ya sea en la de la propiedad pública o colectiva— *es que sirvan al trabajo*; consiguientemente que, sirviendo al trabajo, hagan posible la realización del primer principio de aquel orden, que es el destino universal de los bienes y el derecho a su uso común. Desde ese punto de vista, pues, en consideración del trabajo humano y del acceso común a los bienes destinados al hombre, tampoco conviene excluir la *socialización*, en las condiciones oportunas, de ciertos medios de producción. En el espacio de los decenios que nos separan de la publicación de la Encíclica *Rerum novarum*, la enseñanza de la Iglesia siempre ha recordado todos estos principios, refiriéndose a los argumentos formulados en la tradición mucho más antigua, por ejemplo, los conocidos argumentos de la *Summa theologiae* de Santo Tomás de Aquino.

En este documento, cuyo tema principal es el trabajo humano, es conveniente corroborar todo el esfuerzo a través del cual la enseñanza de la Iglesia acerca de la propiedad ha tratado y sigue tratando de asegurar la primacía del trabajo y, por lo mismo, *la subjetividad* del hombre en la vida social, especialmente en la *estructura dinámica de todo el proceso económico*. Desde esta perspectiva, sigue siendo inaceptable la postura del «rígido» capitalismo, que defiende el derecho exclusivo a la propiedad privada de los medios de producción, como un «dogma» intocable en la vida económica. El principio del respeto del trabajo, exige que este derecho se someta a una revisión constructiva en la teoría y en la práctica. En efecto, si es verdad que el capital, al igual que el conjunto de los medios de producción, constituye a su vez el producto del trabajo de generaciones, entonces no es menos verdad que ese capital se crea incesantemente gracias al trabajo llevado a cabo con la ayuda de ese mismo conjunto de medios de producción, que aparecen como un gran lugar de trabajo en el que, día a día, pone su empeño la presente generación de trabajadores. Se trata aquí, obviamente, de las distintas clases de trabajo, no sólo del llamado trabajo manual, sino también del múltiple trabajo intelectual, desde el de planificación al de dirección.

Bajo esta luz adquieren un significado de relieve particular las numerosas propuestas hechas por expertos en la doctrina social católica y también por el Supremo Magisterio de la Iglesia. Son *propuestas* que se refieren a la *copropiedad de los medios de trabajo*, a la participación de los trabajadores en la gestión y o en los beneficios de la empresa, al llamado «accionariado» del trabajo y otras semejantes. Independientemente de la posibilidad de aplicación concreta de estas diversas propuestas, sigue siendo evidente que el reconocimiento de la justa posición del trabajo y del hombre del trabajo dentro del proceso productivo exige

varias adaptaciones en el ámbito del mismo derecho a la propiedad de los medios de producción; y esto teniendo en cuenta no sólo situaciones más antiguas, sino también y ante todo la realidad y la problemática que se ha ido creando en la segunda mitad de este siglo, en lo que concierne al llamado Tercer Mundo y a los distintos nuevos Países independientes que han surgido, de manera especial pero no únicamente en África, en lugar de los territorios coloniales de otros tiempos.

Por consiguiente, si la posición del «rígido» capitalismo debe ser sometida continuamente a revisión con vistas a una reforma bajo el aspecto de los derechos del hombre, entendidos en el sentido más amplio y en conexión con su trabajo, entonces se debe afirmar, bajo el mismo punto de vista, que estas múltiples y tan deseadas reformas no pueden llevarse a cabo *mediante la eliminación apriorística de la propiedad privada de los medios de producción*. En efecto, hay que tener presente que la simple substracción de esos medios de producción (el capital) de las manos de sus propietarios privados, no es suficiente para socializarlos de modo satisfactorio. Los medios de producción dejan de ser propiedad de un determinado grupo social, o sea de propietarios privados, para pasar a ser propiedad de la sociedad organizada, quedando sometidos a la administración y al control directo de otro grupo de personas, es decir, de aquéllas que, aunque no tengan su propiedad por más que ejerzan el poder dentro de la sociedad, *disponen* de ellos a escala de la entera economía nacional, o bien de la economía local.

Este grupo dirigente y responsable puede cumplir su cometido de manera satisfactoria desde el punto de vista de la primacía del trabajo; pero puede cumplirlo mal, reivindicando para sí al mismo tiempo *el monopolio de la administración y disposición* de los medios de producción, y no dando marcha atrás ni siquiera ante la ofensa a los derechos fundamentales del hombre. Así pues, el mero paso de los medios de producción a propiedad del Estado, dentro del sistema colectivista, no equivale ciertamente a la «socialización» de esta propiedad. Se puede hablar de socialización únicamente cuando quede asegurada la subjetividad de la sociedad, es decir, cuando toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno título a considerarse al mismo tiempo «copropietario» de esa especie de gran taller de trabajo en el que se compromete con todos. Un camino para conseguir esa meta podría ser la de asociar, en cuanto sea posible, el trabajo a la propiedad del capital y dar vida a una rica gama de cuerpos intermedios con finalidades económicas, sociales, culturales: cuerpos que gocen de una autonomía efectiva respecto a los poderes públicos, que persigan sus objetivos específicos manteniendo relaciones de colaboración leal y mutua, con subordinación a las exigencias del bien común y que ofrezcan forma y naturaleza de comunidades vivas; es decir, que los miembros respectivos sean considerados y tratados como personas y sean estimulados a tomar parte activa en la vida de dichas comunidades.

IV

DERECHOS DE LOS HOMBRES DEL TRABAJO

[...]

16. *En el amplio contexto de los derechos humanos*

Si el trabajo —en el múltiple sentido de esta palabra— es una obligación, es decir, un deber, es también a la vez una fuente de derechos por parte del *trabajador*. Estos *derechos* deben ser examinados en el *amplio contexto del conjunto de los derechos del hombre* que le son conaturales, muchos de los cuales son proclamados por distintos organismos internacionales y garantizados cada vez más por los Estados para sus propios ciudadanos. El respeto de este vasto conjunto de los derechos del hombre, constituye la condición fundamental para la paz del mundo contemporáneo: la paz, tanto dentro de los pueblos y de las sociedades como en el campo de las relaciones internacionales, tal como se ha hecho notar ya en muchas ocasiones por el Magisterio de la Iglesia especialmente desde los tiempos de la Encíclica «*Pacem in terris*». Los *derechos humanos que brotan del trabajo*, entran precisamente dentro del más amplio contexto de los derechos fundamentales de la persona.

Sin embargo, en el ámbito de este contexto, tienen un carácter peculiar que corresponde a la naturaleza específica del trabajo humano anteriormente delineada; y precisamente hay que considerarlos según este carácter: El trabajo es, como queda dicho, una *obligación*, es decir, *un deber del hombre* y esto en el *múltiple sentido de esta palabra*. El hombre debe trabajar bien sea por el hecho de que el Creador lo ha ordenado, bien sea por el hecho de su propia humanidad, cuyo mantenimiento y desarrollo exigen el trabajo. El hombre debe trabajar por respeto al prójimo, especialmente por respeto a la propia familia, pero también a la sociedad a la que pertenece, a la nación de la que es hijo o hija, a la entera familia humana de la que es miembro, ya que es heredero del trabajo de generaciones y al mismo tiempo coartífice del futuro de aquellos que vendrán después de él con el sucederse de la historia. Todo esto constituye la obligación moral del trabajo, entendido en su más amplia acepción. Cuando haya que considerar los derechos morales de todo hombre respecto al trabajo, correspondientes a esta obligación, habrá que tener siempre presente el entero y amplio radio de referencias en que se manifiesta el trabajo de cada sujeto trabajador.

En efecto, hablando de la obligación del trabajo y de los derechos del trabajador, correspondientes a esta obligación, tenemos presente, ante todo, la relación entre *el empresario —directo e indirecto—* y el mismo trabajador.

La distinción entre empresario directo e indirecto parece ser muy

importante en consideración de la organización real del trabajo y de la posibilidad de instaurar relaciones justas o injustas en el sector del trabajo.

Si el *empresario directo* es la persona o la institución, con la que el trabajador estipula directamente el contrato de trabajo según determinadas condiciones, como *empresario indirecto* se deben entender muchos factores diferenciados, además del empresario directo, que ejercen un determinado influjo sobre el modo en que se da forma bien sea al contrato de trabajo, bien sea, en consecuencia, a las relaciones más o menos justas en el sector del trabajo humano.

17. *Empresario: «indirecto» y «directo»*

En el concepto de empresario indirecto entran tanto las personas como las instituciones de diverso tipo, así como también los contratos colectivos de trabajo y los *principios* de comportamiento, establecidos por estas personas e instituciones, que determinan todo el *sistema* socio-económico o que derivan de él. El concepto de empresario indirecto implica así muchos y variados elementos. La responsabilidad del empresario indirecto es distinta de la del empresario directo, como lo indica la misma palabra: la responsabilidad es menos directa; pero sigue siendo verdadera responsabilidad: el empresario indirecto determina sustancialmente uno u otro aspecto de la relación de trabajo y condiciona de este modo el comportamiento del empresario directo cuando este último determina concretamente el contrato y las relaciones laborales. Esta constatación no tiene como finalidad la de eximir a este último de su propia responsabilidad sino únicamente la de llamar la atención sobre todo el entramado de condicionamientos que influyen en su comportamiento. Cuando se trata de determinar una *política laboral correcta desde el punto de vista ético* hay que tener presentes todos estos condicionamientos. Tal política es correcta cuando los derechos objetivos del hombre del trabajo son plenamente respetados.

El concepto de empresario indirecto se puede aplicar a toda sociedad y, en primer lugar, al Estado. En efecto, es el Estado el que debe realizar una política laboral justa. No obstante es sabido que, dentro del sistema actual de relaciones económicas en el mundo, se dan *entre los Estados* múltiples *conexiones* que tienen su expresión, por ejemplo, en los procesos de importación y exportación, es decir, en el intercambio recíproco de los bienes económicos, ya sean materias primas o a medio elaborar o bien productos industriales elaborados. Estas relaciones crean a su vez *dependencias* recíprocas y, consiguientemente, sería difícil hablar de plena autosuficiencia, es decir, de autarquía, por lo que se refiere a cualquier Estado aunque sea el más poderoso en sentido económico.

Tal sistema de dependencias recíprocas, es normal en sí mismo; sin embargo, puede convertirse fácilmente en ocasión para diversas formas de explotación o de injusticia, y de este modo influir en la política laboral

de los Estados y en última instancia sobre el trabajador que es el sujeto propio del trabajo. Por ejemplo, *los Países altamente industrializados* y, más aún, las empresas que dirigen a gran escala los medios de producción industrial (las llamadas sociedades multinacionales o transnacionales), ponen precios lo más alto posibles para sus productos, mientras procuran establecer precios lo más bajo posibles para las materias primas o a medio elaborar, lo cual entre otras causas tiene como resultado una desproporción cada vez mayor entre los réditos nacionales de los respectivos Países. La distancia entre la mayor parte de los Países ricos y los Países más pobres no disminuye ni se nivela, sino que aumenta cada vez más, obviamente en perjuicio de estos últimos. Es claro que esto no puede menos de influir sobre la política local y laboral, y sobre la situación del hombre del trabajo en las sociedades económicamente menos avanzadas. El empresario directo, inmerso en concreto en un sistema de condicionamientos, fija las condiciones laborales por debajo de las exigencias objetivas de los trabajadores, especialmente si quiere sacar beneficios lo más alto posibles de la empresa que él dirige (o de las empresas que dirige, cuando se trata de una situación de propiedad «socializada» de los medios de producción).

Este cuadro de dependencias, relativas al concepto de empresario indirecto —como puede fácilmente deducirse— es enormemente vasto y complicado. Para definirlo hay que tomar en consideración, en cierto sentido, el *conjunto* de elementos decisivos para la vida económica *en la configuración de una determinada sociedad y Estado*; pero, al mismo tiempo, han de tenerse también en cuenta conexiones y dependencias mucho más amplias. Sin embargo, la realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos, los cuales, a escala más amplia o más restringida, se dejen guiar sobre todo por el criterio del máximo beneficio. Al contrario, es precisamente la consideración de los derechos objetivos del hombre del trabajo —de todo tipo de trabajador: manual, intelectual, industrial, agrícola, etc.— lo que debe constituir el *criterio adecuado y fundamental* para la formación de toda la economía, bien sea en la dimensión de toda sociedad y de todo Estado, bien sea en el conjunto de la política económica mundial, así como de los sistemas y relaciones internacionales que de ella derivan.

En esta dirección deberían ejercer su influencia todas las *Organizaciones Internacionales* llamadas a ello, comenzando por la Organización de las Naciones Unidas. Parece que la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras tienen que ofrecer aún nuevas aportaciones particularmente en este sentido. En el ámbito de los Estados existen ministerios o *dicasterios del poder público* y también diversos *Organismos sociales* instituidos para este fin. Todo esto indica eficazmente cuánta importancia tiene —como se ha dicho anteriormente— el empresario indirecto en la realización del pleno respeto de los derechos

del hombre del trabajo, dado que los derechos de la persona humana constituyen el elemento clave de todo el orden moral social.

18. *El problema del empleo*

Considerando los derechos de los hombres del trabajo, precisamente en relación con este «empresario indirecto», es decir, con el conjunto de las instancias a escala nacional e internacional responsables de todo el ordenamiento de la política laboral, se debe prestar atención en primer lugar a un *problema fundamental*. Se trata del problema de conseguir trabajo, en otras palabras, del problema de encontrar un *empleo adecuado para todos los sujetos capaces de él*. Lo contrario de una situación justa y correcta en este sector es el desempleo, es decir, la falta de puestos de trabajo para los sujetos capacitados. Puede ser que se trate de falta de empleo en general, o también en determinados sectores de trabajo. El cometido de estas instancias, comprendidas aquí bajo el nombre de empresario indirecto, es el de *actuar contra el desempleo*, el cual es en todo caso un mal y que, cuando asume ciertas dimensiones, puede convertirse en una verdadera calamidad social. Se convierte en problema particularmente doloroso, cuando los afectados son principalmente los jóvenes, quienes, después de haberse preparado mediante una adecuada formación cultural, técnica y profesional, no logran encontrar un puesto de trabajo y ven así frustradas con pena su sincera voluntad de trabajar y su disponibilidad a asumir la propia responsabilidad para el desarrollo económico y social de la comunidad. La obligación de prestar subsidio a favor de los desocupados, es decir, el deber de otorgar las convenientes subvenciones indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias es una obligación que brota del principio fundamental del orden moral en este campo, esto es, del principio del uso común de los bienes o, para hablar de manera aún más sencilla, del derecho a la vida y a la subsistencia.

Para salir al paso del peligro del desempleo, para asegurar empleo a todos, las instancias que han sido definidas aquí como «empresario indirecto» deben proveer a una *planificación global*, con referencia a esa disponibilidad de trabajo diferenciado, donde se forma la vida no sólo económica sino también cultural de una determinada sociedad; deben prestar atención además a la organización correcta y racional de tal disponibilidad de trabajo. Esta solicitud global carga en definitiva sobre las espaldas del Estado, pero no puede significar una centralización llevada a cabo unilateralmente por los poderes públicos. Se trata en cambio de una *coordinación*, justa y racional, en cuyo marco debe ser *garantizada la iniciativa* de las personas, de los grupos libres, de los centros y complejos locales de trabajo, teniendo en cuenta lo que se ha dicho anteriormente acerca del carácter subjetivo del trabajo humano.

El hecho de la recíproca dependencia de las sociedades y Estados, y la necesidad de colaborar en diversos sectores requieren que, manteniendo

do los derechos soberanos de todos y cada uno en el campo de la planificación y de la organización del trabajo dentro de la propia sociedad, se actúe al mismo tiempo en este sector importante, en el marco de la *colaboración internacional* mediante los necesarios tratados y acuerdos. También en esto es necesario que el criterio a seguir en estos pactos y acuerdos sea cada vez más el trabajo humano, entendido como un derecho fundamental de todos los hombres, el trabajo que da análogos derechos a todos los que trabajan, de manera que el nivel de vida de los trabajadores en las sociedades presente *cada vez menos esas irritantes diferencias* que son injustas y aptas para provocar incluso violentas reacciones. Las Organizaciones Internacionales tienen un gran cometido a desarrollar en este campo. Es necesario que se dejen guiar por un diagnóstico exacto de las complejas situaciones y de los condicionamientos naturales, históricos, civiles, etc.; es necesario además que tengan, en relación con los planes de acción establecidos conjuntamente, mayor operatividad, es decir, eficacia en cuanto a la realización.

En este sentido se puede realizar el plan de un progreso universal y proporcionado para todos, siguiendo el hilo conductor de la Encíclica de Pablo VI *Populorum Progressio*. Es necesario subrayar que el elemento constitutivo y a su vez la *verificación* más adecuada de este progreso en el espíritu de justicia y paz, que la Iglesia proclama y por el que no cesa de orar al Padre de todos los hombres y de todos los pueblos, es precisamente la continua *revalorización del trabajo* humano, tanto bajo el aspecto de su finalidad objetiva, como bajo el aspecto de la dignidad del sujeto de todo trabajo, que es el hombre. El progreso en cuestión debe llevarse a cabo mediante el hombre y por el hombre y debe producir frutos en el hombre. Una verificación del progreso será el reconocimiento cada vez más maduro de la finalidad del trabajo y el respeto cada vez más universal de los derechos inherentes a él en conformidad con la dignidad del hombre, sujeto del trabajo.

Una planificación razonable y una organización adecuada del trabajo humano, a medida de las sociedades y de los Estados, deberían facilitar a su vez el descubrimiento de las justas proporciones entre los diversos tipos de empleo: el trabajo de la tierra, de la industria, en sus múltiples servicios, el trabajo de planificación y también el científico o artístico, según las capacidades de los individuos y con vistas al bien común de toda sociedad y de la humanidad entera. A la organización de la vida humana según las múltiples posibilidades laborales deberían corresponder un *adecuado sistema de instrucción y educación* que tenga como principal finalidad el desarrollo de una humanidad madura y una preparación específica para ocupar con provecho un puesto adecuado en el grande y socialmente diferenciado mundo del trabajo.

Echando una mirada sobre la familia humana, esparcida por la tierra, no se puede menos de quedar impresionados ante un *hecho desconcertante* de grandes proporciones, es decir, el hecho de que, mientras por una parte siguen sin utilizarse conspicuos recursos de la naturaleza, existen

por otra grupos enteros de desocupados o subocupados y un sinnúmero de multitudes hambrientas: un hecho que atestigua sin duda el que, dentro de las comunidades políticas como en las relaciones existentes entre ellas a nivel continental y mundial —en lo concerniente a la organización del trabajo y del empleo— hay algo que no funciona y concretamente en los puntos más críticos y de mayor relieve social.

19. Salario y otras prestaciones sociales

Una vez delineado el importante cometido que tiene el compromiso de dar un empleo a todos los trabajadores, con vistas a garantizar el respeto de los derechos inalienables del hombre en relación con su trabajo, conviene referirnos más concretamente a estos derechos, los cuales, en definitiva, surgen de la relación *entre el trabajador y el empresario directo*. Todo cuanto se ha dicho anteriormente sobre el tema del empresario indirecto tiene como finalidad señalar con mayor precisión estas relaciones mediante la expresión de los múltiples condicionamientos en que indirectamente se configuran. No obstante, esta consideración no tiene un significado puramente descriptivo; no es un tratado breve de economía o de política. Se trata de poner en evidencia el *aspecto deontológico y moral*. El problema-clave de la ética social es el de la *justa remuneración* por el trabajo realizado. No existe en el contexto actual otro modo mejor para cumplir la justicia en las relaciones trabajador-empresario que el constituido precisamente por la remuneración del trabajo. Independientemente del hecho de que ese trabajo se lleve a efecto dentro del sistema de la propiedad privada de los medios de producción o en un sistema en que esta propiedad haya sufrido una especie de «socialización», la relación entre el empresario (principalmente directo) y el trabajador se resuelve en base al salario: es decir, mediante la justa remuneración del trabajo realizado.

Hay que subrayar también que la justicia de un sistema socio-económico y, en todo caso, su justo funcionamiento merecen en definitiva ser valorados según el modo como se remunera justamente el trabajo humano dentro de tal sistema. A este respecto volvemos de nuevo al primer principio de todo el ordenamiento ético-social: *el principio del uso común de los bienes*. En todo sistema que no tenga en cuenta las relaciones fundamentales existentes entre el capital y el trabajo, el salario, es decir, *la remuneración del trabajo*, sigue siendo una *vía concreta*, a través de la cual la gran mayoría de los hombres puede acceder a los bienes que están destinados al uso común: tanto los bienes de la naturaleza como los que son fruto de la producción. Los unos y los otros se hacen accesibles al hombre del trabajo gracias al salario que recibe como remuneración por su trabajo. De aquí que, precisamente el salario justo se convierta en todo caso en la *verificación concreta de la justicia* de todo el sistema socio-económico y, de todos modos, de su justo funcionamiento. No es

esta la única verificación, pero es particularmente importante y es en cierto sentido la verificación-clave.

Tal verificación afecta sobre todo a la familia. Una justa remuneración por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de familia es la que sea suficiente para fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro. Tal remuneración puede hacerse bien sea mediante el llamado *salario familiar* —es decir, un salario único dado al cabeza de familia por su trabajo y que sea suficiente para las necesidades de la familia sin necesidad de hacer asumir a la esposa un trabajo retribuido fuera de casa— bien sea mediante otras *medidas sociales*, como subsidios familiares o ayudas a la madre que se dedica exclusivamente a la familia, ayudas que deben corresponder a las necesidades efectivas, es decir, al número de personas a su cargo durante todo el tiempo en que no estén en condiciones de asumirse dignamente la responsabilidad de la propia vida.

La experiencia confirma que hay que esforzarse por la *revalorización social de las funciones maternas*, de la fatiga unida a ellas y de la necesidades que tienen los hijos de cuidado, de amor y de afecto para poderse desarrollar como personas responsables, moral y religiosamente maduras y psicológicamente equilibradas. Será un honor para la sociedad hacer posible a la madre —sin obstaculizar su libertad, sin discriminación psicológica o práctica, sin dejarle en inferioridad ante sus compañeras— dedicarse al cuidado y a la educación de los hijos, según las necesidades diferenciadas de la edad. El abandono obligado de tales tareas, por una ganancia retribuida fuera de casa, es incorrecto desde el punto de vista del bien de la sociedad y de la familia cuando contradice o hace difícil tales cometidos primarios de la misión materna.

En este contexto se debe subrayar que, del modo más general, hay que organizar y adaptar todo el proceso laboral de manera que sean respetadas las exigencias de la persona y sus formas de vida, sobre todo de su vida doméstica, teniendo en cuenta la edad y el sexo de cada uno. Es un hecho que en muchas sociedades las mujeres trabajan en casi todos los sectores de la vida. Pero es conveniente que ellas puedan desarrollar plenamente sus funciones *según la propia índole*, sin discriminaciones y sin exclusión de los empleos para los que están capacitadas, pero sin al mismo tiempo perjudicar sus aspiraciones familiares y el papel específico que les compete para contribuir al bien de la sociedad junto con el hombre. *La verdadera promoción de la mujer* exige que el trabajo se estructure de manera que no deba pagar su promoción con el abandono del carácter específico propio y en perjuicio de la familia en la que como madre tiene un papel insustituible.

Además del salario, aquí entran en juego *algunas otras prestaciones sociales* que tienen por finalidad la de asegurar la vida y la salud de los trabajadores y de su familia. Los gastos relativos a la necesidad de cuidar la salud, especialmente en caso de accidentes de trabajo, exigen que el trabajador tenga fácil acceso a la asistencia sanitaria y esto, en cuanto

sea posible, a bajo costo e incluso gratuitamente. Otro sector relativo a las prestaciones es el vinculado con el *derecho al descanso*; se trata ante todo de regular el descanso semanal, que comprenda al menos el domingo y además un reposo más largo, es decir, las llamadas vacaciones una vez al año o eventualmente varias veces por períodos más breves. En fin, se trata del derecho a la pensión, al seguro de vejez y en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral. En el ámbito de estos derechos principales, se desarrolla todo un sistema de derechos particulares que, junto con la remuneración por el trabajo, deciden el correcto planteamiento de las relaciones entre el trabajador y el empresario. Entre estos derechos hay que tener siempre presente el derecho a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral.

20. *Importancia de los sindicatos*

Sobre la base de todos estos derechos, junto con la necesidad de asegurarlos por parte de los mismos trabajadores, brota aún otro derecho, es decir, *el derecho a asociarse*; esto es, a formar asociaciones o uniones que tengan como finalidad la defensa de los intereses vitales de los hombres empleados en las diversas profesiones. Estas uniones llevan el nombre de *sindicatos*. Los intereses vitales de los hombres del trabajo son hasta un cierto punto comunes a todos; pero al mismo tiempo todo tipo de trabajo, toda profesión posee un carácter específico que en estas organizaciones debería encontrar su propio reflejo particular.

Los sindicatos tienen su origen, de algún modo, en las corporaciones artesanas medievales, en cuanto que estas organizaciones unían entre sí a hombres pertenecientes a la misma profesión y por consiguiente *en base al trabajo que realizaban*. Pero al mismo tiempo, los sindicatos se diferencian de las corporaciones en este punto esencial: los sindicatos modernos han crecido sobre la base de la lucha de los trabajadores, del mundo del trabajo y ante todo de los trabajadores industriales para la tutela de *sus justos derechos* frente a los empresarios y a los propietarios de los medios de producción. La defensa de los intereses existenciales de los trabajadores en todos los sectores, en que entran en juego sus derechos, constituye el cometido de los sindicatos. La experiencia histórica enseña que las organizaciones de este tipo son *un elemento indispensable de la vida social*, especialmente en las sociedades modernas industrializadas. Esto evidentemente no significa que solamente los trabajadores de la industria puedan instituir asociaciones de este tipo. Los representantes de cada profesión pueden servirse de ellas para asegurar sus respectivos derechos. Existen pues los sindicatos de los agricultores y de los trabajadores del sector intelectual, existen además las uniones de empresarios. Todos, como ya se ha dicho, se dividen en sucesivos grupos o subgrupos, según las particulares especializaciones profesionales.

La doctrina social católica no considera que los sindicatos constituyan únicamente el reflejo de la estructura de «clase» de la sociedad y que sean el exponente de la lucha de clase que gobierna inevitablemente la vida social. Sí, son *un exponente de la lucha por la justicia social*, por los justos derechos de los hombres del trabajo según las distintas profesiones. Sin embargo, esta «lucha» debe ser vista como una dedicación normal «en favor» del justo bien: en este caso, por el bien que corresponde a las necesidades y a los méritos de los hombres del trabajo asociados por profesiones; pero *no es una lucha «contra» los demás*. Si en las cuestiones controvertidas asume también un carácter de oposición a los demás, esto sucede en consideración del bien de la justicia social; y no por «la lucha» o por eliminar al adversario. El trabajo tiene como característica propia que, antes que nada, une a los hombres y en esto consiste su fuerza social: la fuerza de construir una comunidad. En definitiva, en esta comunidad deben unirse de algún modo tanto los que trabajan como los que disponen de los medios de producción o son sus propietarios. *A la luz de esta fundamental estructura de todo trabajo* —a la luz del hecho de que en definitiva en todo sistema social el «trabajo» y el «capital» son los componentes indispensables del proceso de producción— la unión de los hombres para asegurarse los derechos que les corresponden, nacida de la necesidad del trabajo, sigue siendo un factor constructivo de *orden social* y de *solidaridad*, del que no es posible prescindir.

Los justos esfuerzos por asegurar los derechos de los trabajadores, unidos por la misma profesión, deben tener siempre en cuenta las limitaciones que impone la situación económica general del país. Las exigencias sindicales no pueden transformarse en una especie de «*egoísmo*» *de grupo o de clase*, por más que puedan y deban tender también a corregir —con miras al bien común de toda la sociedad— incluso todo lo que es defectuoso en el sistema de propiedad de los medios de producción o en el modo de administrarlos o de disponer de ellos. La vida social y económico-social es ciertamente como un sistema de «vasos comunicantes», y a este sistema debe también adoptarse toda actividad social que tenga como finalidad salvaguardar los derechos de los grupos particulares.

En este sentido la actividad de los sindicatos entra indudablemente en el campo de la «*política*», entendida ésta como *una prudente solicitud por el bien común*. Pero al mismo tiempo, el cometido de los sindicatos no es «hacer política» en el sentido que se da hoy comúnmente a esta expresión. Los sindicatos no tienen carácter de «partidos políticos» que luchan por el poder y no deberían ni siquiera ser sometidos a las decisiones de los partidos políticos o tener vínculos demasiado estrechos con ellos. En efecto, en tal situación ellos pierden fácilmente el contacto con lo que es su cometido específico que es el de asegurar los justos derechos de los hombres del trabajo en el marco del bien común de la sociedad entera y se convierten en cambio *en un instrumento para otras finalidades*.

Hablando de la tutela de los justos derechos de los hombres del trabajo, según sus profesiones, es necesario naturalmente tener siempre presente lo que decide acerca del carácter subjetivo del trabajo en toda profesión; pero al mismo tiempo, o antes que nada, lo que condiciona la dignidad propia del sujeto del trabajo. Se abren aquí múltiples posibilidades en la actuación de las organizaciones sindicales y esto incluso en su *empeño de carácter instructivo, educativo y de promoción de la auto-educación*. Es benemérita la labor de las escuelas, de las llamadas «universidades «laborales» o «populares», de los programas y cursos de formación, que han desarrollado y siguen desarrollando precisamente este campo de actividad. Se debe siempre desear que, gracias a la obra de sus sindicatos, el trabajador pueda no sólo «tener» más, sino ante todo «ser» más: es decir pueda realizar más plenamente su humanidad en todos los aspectos.

Actuando en favor de los justos derechos de sus miembros, los sindicatos se sirven *también del método de la «huelga»*, es decir, del bloqueo del trabajo, como de una especie de ultimátum dirigido a los órganos competentes y sobre todo a los empresarios. Este es un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las debidas condiciones y en los justos límites. En relación con esto los trabajadores deberían tener asegurado el *derecho a la huelga*, sin sufrir sanciones penales personales por participar en ella. Admitiendo que es un medio legítimo, se debe subrayar al mismo tiempo que la huelga sigue siendo, en cierto sentido, un medio extremo. *No se puede abusar* de él; no se puede abusar de él especialmente en función de los «juegos políticos». Por lo demás, no se puede jamás olvidar que cuando se trata de servicios esenciales para la convivencia civil, éstos han de asegurarse en todo caso mediante medidas legales apropiadas, si es necesario. El abuso de la huelga puede conducir a la paralización de toda la vida socio-económica, y esto es contrario a las exigencias del bien común de la sociedad, que corresponde también a la naturaleza bien entendida del trabajo mismo.

21. *Dignidad del trabajo agrícola*

Todo cuanto se ha dicho precedentemente sobre la dignidad del trabajo, sobre la dimensión objetiva y subjetiva del trabajo del hombre, tiene aplicación directa en el problema del trabajo agrícola y en la situación del hombre que cultiva la tierra en el duro trabajo de los campos. En efecto se trata de un sector muy amplio del ambiente de trabajo de nuestro planeta, no circunscrito a uno u otro continente, no limitado a las sociedades que han conseguido ya un determinado grado de desarrollo y de progreso. El mundo agrícola, que ofrece a la sociedad los bienes necesarios para su sustento diario, reviste *una importancia fundamental*. Las condiciones del mundo rural y del trabajo agrícola no son iguales en todas partes, y es diversa la posición social de los agricultores en los distintos Países. Esto no depende únicamente del grado de desarrollo de

la técnica agrícola sino también y quizá más aún del reconocimiento de los justos derechos de los trabajadores agrícolas y finalmente del nivel de conciencia respecto a toda la ética social del trabajo.

El trabajo del campo conoce no leves dificultades tales como el esfuerzo físico continuo y a veces extenuante, la escasa estima en que está considerado socialmente hasta el punto de crear entre los hombres de la agricultura el sentimiento de ser socialmente unos marginados hasta acelerar en ellos el fenómeno de la fuga masiva del campo a la ciudad y desgraciadamente hacia condiciones de vida todavía más deshumanizadoras. Se añade a esto la falta de una adecuada formación profesional y de medios apropiados, un determinado individualismo sinuoso, y además *situaciones objetivamente injustas*. En algunos Países en vía de desarrollo, millones de hombres se ven obligados a cultivar las tierras de otros y son explotados por los latifundistas, sin la esperanza de llegar un día a la posesión ni siquiera de un pedazo mínimo de tierra en propiedad. Faltan formas de tutela legal para la persona del trabajador agrícola y su familia en caso de vejez, de enfermedad o de falta de trabajo. Largas jornadas de pesado trabajo físico son pagadas miserablemente. Tierras cultivables son abandonadas por sus propietarios; títulos legales para la posesión de un pequeño terreno, cultivado como propio durante años, no se tienen en cuenta o quedan sin defensa ante el «hambre de tierra» de individuos o de grupos más poderosos. Pero también en los Países económicamente desarrollados, donde la investigación científica, las conquistas tecnológicas o la política del Estado han llevado la agricultura a un nivel muy avanzado, el derecho al trabajo puede ser lesionado, cuando se niega al campesino la facultad de participar en las opciones decisorias correspondientes a sus prestaciones laborales, o cuando se le niega el derecho a la libre asociación en vista de la justa promoción social, cultural y económica del trabajador agrícola.

Por consiguiente, en muchas situaciones son necesarios cambios radicales y urgentes para volver a dar a la agricultura —y a los hombres del campo— el justo valor *como base de una sana economía*, en el conjunto del desarrollo de la comunidad social. Por lo tanto es menester proclamar y promover la dignidad del trabajo, de todo trabajo, y, en particular, del trabajo agrícola, en el cual el hombre, de manera tan elocuente, «somete» la tierra recibida en don por parte de Dios y afirma su «dominio» en el mundo visible.

22. *La persona minusválida y el trabajo*

Recientemente, las comunidades nacionales y las organizaciones internacionales han dirigido su atención a otro problema que va unido al mundo del trabajo y que está lleno de incidencias: el de las personas minusválidas. Son ellas también sujetos plenamente humanos, con sus correspondientes derechos innatos, sagrados e inviolables, que, a pesar de las limitaciones y los sufrimientos grabados en sus cuerpos y en sus faculta-

des, ponen más de relieve la dignidad y grandeza del hombre. Dado que la persona minusválida es un sujeto con todos los derechos, debe facilitársele el participar en la vida de la sociedad en todas las dimensiones y a todos los niveles que sean accesibles a sus posibilidades. La persona minusválida es uno de nosotros y participa plenamente de nuestra misma humanidad. Sería radicalmente indigno del hombre y negación de la común humanidad admitir en la vida de la sociedad, y, por consiguiente, en el trabajo, únicamente a los miembros plenamente funcionales porque, obrando así, se caería en *una grave forma de discriminación*, la de los fuertes y sanos contra los débiles y enfermos. El trabajo en sentido objetivo debe estar subordinado, también en esta circunstancia, a la dignidad del hombre, al sujeto del trabajo y no a las ventajas económicas.

Corresponde por consiguiente a las diversas instancias implicadas en el mundo laboral, al empresario directo como al indirecto, promover con medidas eficaces y apropiadas el derecho de la persona minusválida a la preparación profesional y al trabajo, de manera que ella pueda integrarse en una actividad productora para la que sea idónea. Esto plantea muchos problemas en orden práctico, legal y también económico; pero corresponde a la comunidad, o sea, a las autoridades públicas, a las asociaciones y a los grupos intermedios, a las empresas y a los mismos minusválidos aportar conjuntamente ideas y recursos para llegar a esta finalidad irrenunciable: *que se ofrezca un trabajo a las personas minusválidas, según sus posibilidades*, dado que lo exige su dignidad de hombres y de sujetos del trabajo. Cada comunidad habrá de darse las estructuras adecuadas con el fin de encontrar o crear puestos de trabajo para tales personas tanto en las empresas públicas y en las privadas, ofreciendo un puesto normal de trabajo o uno más apto, como en las empresas y en los llamados ambientes «protegidos».

Deberá prestarse gran atención, lo mismo que para los demás trabajadores, a las condiciones físicas y psicológicas de los minusválidos, a la justa remuneración, a las posibilidades de promoción, y a la eliminación de los diversos obstáculos. Sin tener que ocultar que se trata de un compromiso complejo y nada fácil, es de desear que *una recta concepción del trabajo en sentido subjetivo* lleve a una situación que dé a la persona minusválida la posibilidad de sentirse no al margen del mundo del trabajo o en situación de dependencia de la sociedad, sino como un sujeto de trabajo de pleno derecho, útil, respetado por su dignidad humana, llamado a contribuir al progreso y al bien de su familia y de la comunidad según las propias capacidades.

23. *El trabajo y el problema de la emigración*

Es menester, finalmente, pronunciarse al menos sumariamente sobre el tema de la llamada *emigración por trabajo*. Este es un fenómeno antiguo, pero que todavía se repite y tiene, también hoy, grandes implicaciones en la vida contemporánea. El hombre tiene derecho a abandonar su

País de origen por varios motivos —como también a volver a él— y a buscar mejores condiciones de vida en otro País. Este hecho, ciertamente se encuentra con dificultades de diversa índole; ante todo, constituye generalmente una pérdida para el País del que se emigra. Se aleja un hombre y a la vez un miembro de una gran comunidad, que está unida por la historia, la tradición, la cultura, para iniciar una vida dentro de otra sociedad, unida por otra cultura, y muy a menudo también por otra lengua. Viene a faltar en tal situación *un sujeto de trabajo*, que con el esfuerzo del propio pensamiento o de las propias manos podría contribuir al aumento del bien común en el propio País; he aquí que este esfuerzo, esta ayuda se da a otra sociedad, la cual, en cierto sentido, tiene a ello un derecho menor que la patria de origen.

Sin embargo, aunque la emigración es bajo cierto aspecto un mal, en determinadas circunstancias es, como se dice, un mal necesario. Se debe hacer todo lo posible —y ciertamente se hace mucho— para que este mal, en sentido material, no comporte mayores *males en sentido moral*; es más, para que, dentro de lo posible, comporte incluso un bien en la vida personal familiar y social del emigrado, en lo que concierne tanto al País donde llega, como a la Patria que abandona. En este sector muchísimo depende de una justa legislación, en particular cuando se trata de los derechos del hombre del trabajo. Se entiende que tal problema entra en el contexto de las presentes consideraciones, sobre todo bajo este punto de vista.

Lo más importante es que el hombre, que trabaja fuera de su País natal, como emigrante o como trabajador temporal, no se encuentre en *desventaja* en el ámbito de los derechos concernientes al trabajo respecto a los demás trabajadores de aquella determinada sociedad. La emigración por motivos de trabajo no puede convertirse de ninguna manera en ocasión de explotación financiera o social. En lo referente a la relación del trabajo con el trabajador inmigrado deben valer los mismos criterios que sirven para cualquier otro trabajador en aquella sociedad. El valor del trabajo debe medirse con el mismo metro y no en relación con las diversas nacionalidades, religión o raza. Con mayor razón *no puede ser explotada una situación de coacción* en la que se encuentra el emigrado. Todas estas circunstancias deben ceder absolutamente, —naturalmente una vez tomadas en consideración su cualificación específica—, frente al valor fundamental del trabajo, el cual está unido con la dignidad de la persona humana. Una vez más se debe repetir el principio fundamental: la jerarquía de valores, el sentido profundo del trabajo mismo exigen que el capital esté en función del trabajo y no el trabajo en función del capital.

[...]

